

Quito, 24 de julio de 2019

Oficio No. AN-PCEPDEPM-2019-087-OF

Señor Ingeniero
César Litardo
Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador
Presente.-

Trámite **373352**
Codigo validación **N7W18PAA0V**
Tipo de documento MEMORANDO INTERNO
Fecha recepción 25-Jul-2019 16:57
Numeración an-pcepdep-2019-087-of
Fecha efica 24-Jul-2019
Remite ALBORNOZ VINTIMILLA
CLAUDIO ESTEBAN
Fundón ASAMBLEISTA
remite
Revisa el estado de su trámite en:
<http://tramites.asambleanacional.gob.ec/estadoTramite.jsf>

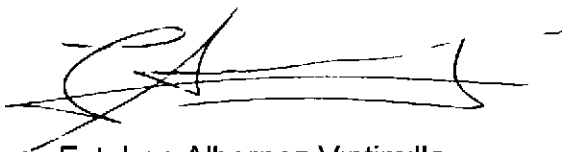
01/00 Una Hoja
Anexo 81 Papeles

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, amparado en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tengo a bien remitir el **Informe para Primer Debate del “Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”**, a fin de que se continúe con el trámite respectivo al interior de la Asamblea Nacional

Por la atención que brinde al presente, anticipo mis agradecimientos

Atentamente,



Esteban Albornoz Vintimilla
**Presidente de la Comisión Especializada Permanente del
Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa**

c c **Dr. John de Mora**
Secretario General Temporal
Asamblea Nacional del Ecuador



ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa



**COMISIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO, PRODUCTIVO
Y LA MICROEMPRESA**

Informe para Primer Debate del “Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”

COMISIÓN:

Esteban Alborno Vintimilla – Presidente
Homero Castanier Jaramillo – Vicepresidente

Fernando Burbano Montenegro
Rubén Bustamante Monteros
Elizabeth Cabezas Guerrero
Fernando Callejas Barona
Guillermo Celi Santos
María Mercedes Cuesta Concari
Carmen Rivadeneira Bustos
César Rohon Hervas
Doris Soliz Carrión
Mauricio Zambrano Valle
Mariano Zambrano Vera

Quito, Distrito Metropolitano, 24 de julio de 2019

1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el **Informe para Primer Debate del “Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”**, calificado por el Consejo de Administración Legislativa y asignado para el tratamiento de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

2. ANTECEDENTES

2.1.- La asambleísta Mae Montaña Valencia, mediante oficio No. 042-2014- MMV-AN de 17 de marzo del 2014 y oficio No. 048-2014- MMV-AN de 24 de marzo del 2014, presentó ante la Asamblea Nacional el **“Proyecto de Ley Orgánica de Defensa de Emprendedores Urbanos”** y el **“Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento del Emprendimiento”** respectivamente, mismos que fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa, CAL mediante Resoluciones CAL-2013-2015-094 y CAL-2013-2015-095, ambas de 03 de abril del 2014. Ambos proyectos de ley fueron unificados y cuentan con Informe para Primer Debate, emitido mediante oficio No. 074-CDEPM-AN-JCC-2015 de 08 de abril del 2015, que no ha sido debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional, toda vez que la Sesión No. 325 convocada para este efecto fue suspendida, sin que hayan retornado para su tratamiento y discusión a esta mesa legislativa.

2.2.- Mediante oficio No. ANCVL-0111-2016 de 07 de agosto del 2016, el ex asambleísta Cristian Viteri presentó el **“Proyecto de Ley para el Registro, Fortalecimiento y Estímulo de los Microemprendedores – MEI”**, que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, CAL mediante Resolución CAL-2015-2017-202 de 20 de septiembre del 2016, mismo que fue conocido oportunamente por la Comisión Especializada del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de aquel entonces.

2.3.- Mediante oficio No. DA-EAV-2018-033-OF de 19 de diciembre de 2018, los asambleístas Esteban Albornoz Vintimilla y César Rohon Hervas, remitieron a la Presidencia de la Asamblea Nacional el **“Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”**, para que lo difunda y ponga en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, CAL, a efecto de que se proceda con el trámite constitucional que corresponda.

2.4.- Mediante Resolución CAL-2017-2019-589 de 15 de enero de 2019, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó el **“Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”**, y dispuso sea remitido para que se inicie su trámite correspondiente a la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, en virtud de que cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, constante en el memorando No. SAN-2019-4630 de 22 de enero de 2019.

2.5.- Esta Comisión avocó conocimiento del referido Proyecto de Ley en la Sesión No. 087 de 06 de febrero del 2019, en la cual se dispuso su sociabilización, conforme lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

2.6.- Durante la etapa de socialización hasta la aprobación del Informe para Primer Debate han comparecido en esta Comisión los siguientes actores públicos y privados, ciudadanos y entidades del Estado:

NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	SESIÓN Y FECHA
As. Esteban Albornoz	Asambleísta por la provincia del Azuay	Asamblea Nacional	Sesión No. 087 de 06 de febrero de 2019
As. César Rohon	Asambleísta por la provincia del Guayas	Asamblea Nacional	Sesión No. 087 de 06 de febrero de 2019
Rubén Morán	Subsecretario de Inversiones	Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca	Sesión No. 087 de 06 de febrero de 2019
Patricio Alarcón	Presidente	Cámara de Comercio de Quito, CCQ	Sesión No. 087 de 06 de febrero de 2019
Camilo Pinzón	Presidente Ejecutivo	Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, AEI	Sesión No. 087 de 06 de febrero de 2019
Juan David Gómez	CEO y Emprendedor	Waykana Guayusa	Sesión No. 087 de 06 de febrero de 2019
Yuri Parreño	Viceministro de Industrias y Productividad	Ministerio de Productividad, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca	Sesión No. 091 de 27 de marzo de 2019
Ricardo Zambrano	Coordinador Zonal 9		
Juan Carlos Alarcón	Delegado del Ministro de Economía y Finanzas	Ministerio de Economía y Finanzas	Sesión No. 092 de 10 de abril de 2019
Pablo Carrera	Coordinador del Programa de	Universidad San Francisco de Quito	Sesión No. 092 de 10 de abril de 2019

	Emprendimiento		
Kathy Coral	Docente	Universidad Internacional SEK	Sesión No. 092 de 10 de abril de 2019
Esteban Ortiz	Intendente de Compañías de Quito	Superintendencia de Compañías	Sesión No. 094 de 24 de abril de 2019
Alberto Dahik	Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo (CESDE)	Universidad Espíritu Santo, UESS	Sesión No. 094 de 24 de abril de 2019
César Espinoza	Director de Programas de Postgrados		
Guido Caicedo	Director del Centro de Emprendimiento	Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL	Sesión No. 094 de 24 de abril de 2019
Eduarne Quincoces	Coordinador de Espacios de Innovación y Star Ups		
Katya Delgado	Asesora del Rectorado		
Eduardo Jaramillo	Presidente	Pacific Advisor	Sesión No. 094 de 24 de abril de 2019
Soledad Álvarez	Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación	Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT	Sesión No. 096 de 08 mayo de 2019
Cristina Gonzales	Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología		
Juan Carlos Díaz-Granados	Director Ejecutivo	Cámara de Comercio de Guayaquil	Sesión No. 096 de 08 mayo de 2019
Santiago Cevallos	Director Ejecutivo	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI	Sesión No. 096 de 08 mayo de 2019
Nathalie Cely	Presidenta Ejecutiva	Centro de Competitividad e Innovación	Sesión No. 096 de 08 mayo de 2019
Margarita Hernández	Superintendente de Economía Popular y Solidaria	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	Sesión No. 099 de 29 mayo de 2019
Mariano Proaño	Viceministro de Turismo	Ministerio de Turismo	Sesión No. 100 de 05 junio de 2019

Susana Suarez	Subsecretaria de Regulación y Control		
Elías Tenorio	Secretario Técnico de Juventudes	Secretaría Técnica de Juventudes	Sesión No. 001 de 12 junio de 2019
Carlos Luis Tamayo	Gerente General	BANECUADOR	Sesión No. 001 de 12 junio de 2019

2.7.- Como parte de las actividades y trabajo que desarrolla la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, se llevaron acabo y participaron en varios eventos, reuniones, conversatorios y foros de discusión y sociabilización con relación al presente Proyecto de Ley, conforme se detalla a continuación:

Evento	Ciudad	Fecha
Conversatorio y Sociabilización del Proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación en la Universidad Espíritu Santo (UEES)	Guayaquil	04-02-2019
Encuentro con Especialistas en Emprendimiento e Innovación en el Salón de Ex presidentes de la Asamblea Nacional	Quito	17-04-2019
Simposio Desafíos de la Economía del Conocimiento: Parques Científicos y Desarrollo Local en la Escuela Politécnica Nacional donde se sociabilizó el Proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación	Quito	28-05-2019
Encuentro de Emprendedores y Innovación en el Instituto Superior Tecnológico de Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo de los Tsáchilas	10-06-2019
Reunión de trabajo sobre el Proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación con Universidad de Cuenca, Azuay, Salesiana y Católica de Cuenca	Cuenca	28-06-2019

2.8.- Han presentado por escrito sus observaciones hasta la aprobación del Informe para Primer Debate, los siguientes actores públicos y privados, ciudadanos, entidades del Estado y asambleístas:

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	No. OFICIO
Camilo Pinzón	Alianza para la Emprendimiento e Innovación, AEI	Presidente del Directorio	s/n de 06 de febrero del 2019
Francisco Villegas	N/A	Ciudadano	Correo electrónico s/n de 22 de abril del 2019

Claudia Arteaga	KREAB	Managing Partner	Correo electrónico s/n de 22 de abril del 2019
Cecilia Paredes	Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL	Rectora	ESPOL-R-2019-110 de 23 de abril del 2019
Daniela Perlavo	IMPAQTO Labs	Directora	Correo electrónico s/n de 24 de abril del 2019
Eduardo Jaramillo	Pacific Advisor	Presidente	s/n de 29 de abril del 2019
María Mercedes Cuesta	Asamblea Nacional	Asambleísta Nacional	486-MMCC-AN-2019 de 30 de abril del 2019
Esteban Ortíz	Superintendencia de Compañías	Intendente de Compañías de Quito	SCVS-IRQ-2019-00027503-0 de 30 de abril del 2019
			SCVS-IRQ-2019-00027237-0 de 30 de abril del 2019
Pablo Arosemena	Cámara de Comercio de Guayaquil	Presidente	PCCG-004-19 de 06 de mayo del 2019
María Mercedes Cuesta	Asamblea Nacional	Asambleísta Nacional	488-MMCC-AN-2019 de 07 de mayo del 2019
María Mercedes Cuesta	Asamblea Nacional	Asambleísta Nacional	489-MMCC-AN-2019 de 07 de mayo del 2019
Santiago Cevallos	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI	Director General	SENADI-DG-2019-0193-OF de 07 de mayo del 2019
Ximena Peña	Asamblea Nacional	Asambleísta por Estados Unidos y Canadá	XPP-AN-2019-300 de 08 de mayo del 2019
Silvana Vallejo	Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP	Directora General	SERCOP-SERCOP-2019-0450-OF de 15 de mayo del 2019
Esteban Albornoz	Asamblea Nacional	Asambleísta por Azuay	DA-EAV-2019-037-OF de 04 de junio del 2019
Margarita Hernández	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS	Superintendente	SEPS-SGD-2019-17074-OF de 06 de junio del 2019
Fernando Burbano	Asamblea Nacional	Asambleísta Nacional	AN-FFBM-OF No. 441 de 11 de junio del 2019

Adriana Tieber	Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI	Gerente de Espacios Público Privados	s/n de 13 de junio del 2019
Mariano Zambrano	Asamblea Nacional	Asambleísta por Manabí	MZVAM-2019-074 de 18 de junio del 2019
Esteban Albornoz	Asamblea Nacional	Asambleísta por Azuay	DA-EAV-2019-058-OF de 04 de julio del 2019
Doris Solíz	Asamblea Nacional	Asambleísta por Azuay	093-DSC-AN-2019 de 10 de julio del 2019
Rina Campain	Asamblea Nacional	Asambleísta por Esmeraldas	00235-RCB-AN-2019 de 15 de julio del 2019
Jeannine Cruz Vaca	Asamblea Nacional	Asambleísta por Loja	1018-JC-CREO-AN-19 de 18 de julio 2019
María Mercedes Cuesta	Asamblea Nacional	Asambleísta Nacional	542-MMCC-AN-2019 de 23 de julio del 2019

2.9.- La Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, conoció, socializó, tramitó y debatió el **“Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”**, en el desarrollo de las Sesiones: Sesión No. 087 de 06 de febrero de 2019; Sesión No. 091 de 27 de marzo de 2019; Sesión No. 092 de 10 de abril de 2019; Sesión No. 094 de 24 de abril del 2019; Sesión No. 096 de 08 mayo de 2019; Sesión No. 099 de 29 mayo de 2019; Sesión No. 100 de 05 junio de 2019; Sesión No. 001 de 12 junio de 2019; Continuación de la Sesión No. 003 de 10 de julio del 2019, Sesiones No. 005 y 006 de 17 y 24 de julio de 2019, respectivamente; en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde a través de sus comunicaciones e intervenciones presentaron sus posturas, comentarios y observaciones de manera verbal y escrita los asambleístas: Esteban Albornoz; Homero Castanier; Ximena Peña; Mauricio Proaño; Michel Doumet; Ronny Aleaga; Daniel Mendoza; Patricio Donoso; Rubén Bustamante; Fernando Callejas; Guillermo Celi; Carmen Rivadeneira; César Rohon; Doris Soliz; Mariano Zambrano; Mauricio Zambrano; Fernando Burbano; María Mercedes Cuesta; Elizabeth Cabezas; Jorge Serrano (alterno); Violeta Saavedra (alterna); Doris Calderón (alterna); Felisita Cedeño (alterna); María Cristina López (alterna); y, Joaquín Peña Bernal (alterno).

2.10.- En la Sesión No. 006 de 24 de julio de 2019, la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa conoció, debatió y aprobó por unanimidad con doce (12) votos afirmativos el **Informe para Primer Debate del “Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”**, así como se aprobó la designación del asambleísta Esteban Albornoz Vintumilla, como ponente del Proyecto de Ley y del presente Informe.

ASAMBLEA NACIONAL

3. BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY

Para el tratamiento del “**Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación**”, se han considerado los siguientes aspectos de carácter constitucional y legal:

3.1.- Constitución de la República

“Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley:

(...)

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.

(...)”

“Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. Las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través de acuerdos o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguientes casos:

1. Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes.
3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados.
4. Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los gobiernos autónomos descentralizados.
5. Modificar la división político-administrativa del país, excepto en lo relativo a las parroquias.
6. Otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales.”

“Art. 133.- Las leyes serán orgánicas y ordinarias.

Serán leyes orgánicas:

1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución.
2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

ASAMBLEA NACIONAL

3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados.
4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral.

La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.

Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica.”

“Art. 134.- La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde:

1. A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional.
2. A la Presidenta o Presidente de la República.
3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia.
4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones.
5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.
6. Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán participar en su debate, personalmente o por medio de sus delegados.”

“Art. 136.- Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.”

“Art. 137.- El proyecto de ley será sometido a dos debates. La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, dentro de los plazos que establezca la ley, ordenará que se distribuya el proyecto a los miembros de la Asamblea y se difunda públicamente su extracto, y enviará el proyecto a la comisión que corresponda, que iniciará su respectivo conocimiento y trámite.

ASAMBLEA NACIONAL

Las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, podrán acudir ante la comisión y exponer sus argumentos.

Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la Presidenta o Presidente de la República para que lo sancione u objete de forma fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo de treinta días posteriores a su recepción por parte de la Presidenta o Presidente de la República, se promulgará la ley, y se publicará en el Registro Oficial.”

3.2.- Ley Orgánica de la Función Legislativa

“Art. 9.- Funciones y Atribuciones.- La Asamblea Nacional cumplirá las atribuciones previstas en la Constitución de la República, la Ley y las siguientes:

(...)

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio;

(...)”

Art. 53.- Clases de leyes.- Las leyes serán orgánicas y ordinarias.

Serán leyes orgánicas:

1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución de la República;
2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales;
3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados; y,
4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral.

La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional.

Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica. Las leyes ordinarias se aprobarán con la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional.

ASAMBLEA NACIONAL

Art. 54.- De la iniciativa.- La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde:

1. A las y los asambleístas que integran la Asamblea Nacional, con el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de sus miembros;
2. A la Presidenta o Presidente de la República;
3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia;
4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública, en las materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones; y,
5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional.

Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán participar en su debate, personalmente o por medio de sus delegados, previa solicitud y autorización de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional.

Art. 55.- De la presentación del proyecto.- Los proyectos de ley serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, quien ordenará a la Secretaría General de la Asamblea Nacional distribuya el proyecto a todas las y los asambleístas, difunda públicamente su contenido en el portal Web oficial de la Asamblea Nacional, se difunda públicamente su extracto y remita el proyecto al Consejo de Administración Legislativa.

Art. 56.- Calificación de los proyectos de Ley.- El Consejo de Administración Legislativa calificará los proyectos de ley remitidos por la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional y verificará que cumpla, con los siguientes requisitos:

1. Que se refiera a una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte,
2. Que contenga exposición de motivos y articulado; y,
3. Que cumpla los requisitos que la Constitución de la República y esta Ley establecen sobre la iniciativa legislativa.

Si el proyecto no reúne los requisitos antes detallados no se calificará.

Si el proyecto de ley es calificado, el Consejo de Administración Legislativa establecerá la prioridad para el tratamiento del mismo y la comisión especializada que lo tramitará. El Secretario General del Consejo de Administración Legislativa inmediatamente remitirá a la Presidenta o Presidente de la comisión especializada,

ASAMBLEA NACIONAL

junto con el proyecto de ley, la resolución en la que conste la fecha de inicio de tratamiento del mismo

El Consejo de Administración Legislativa, en un plazo máximo de treinta días, contestará motivadamente a los proponentes del proyecto de ley, la resolución que se ha tomado respecto del trámite de su propuesta.

La Presidenta o Presidente del Consejo de Administración Legislativa, ordenará a la Secretaría General de la Asamblea Nacional, que distribuya a todas las y los asambleístas el contenido de la resolución que califica o no el proyecto de ley, dentro de las veinticuatro horas siguientes de adoptada, así como que se difunda públicamente su contenido en el portal Web oficial de la Asamblea Nacional.

Art. 57.- Del tratamiento del proyecto de ley.- A partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, dispuesta por el Consejo de Administración Legislativa, la Presidenta o Presidente de la comisión especializada ordenará se ponga inmediatamente en conocimiento de todas las y los integrantes de la misma, de la ciudadanía y de las organizaciones registradas para el efecto, el inicio de dicho trámite y el proyecto de ley, a través del portal web oficial de la Asamblea Nacional.

Art. 58.- Informes de las comisiones especializadas.- Las comisiones especializadas dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, presentarán a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional sus informes con las observaciones que juzguen necesarias introducir. Dentro del referido plazo, se deberá considerar un tiempo no menor a los quince primeros días, para que las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, puedan acudir ante la comisión especializada y exponer sus argumentos. En ningún caso, la comisión especializada podrá emitir su informe en un plazo menor a quince días.

La comisión especializada podrá pedir justificadamente a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, una prórroga de máximo veinte días para presentar el informe detallado en este artículo.

En todos los casos, uno o varios asambleístas podrán presentar informes de minoría.

Art. 60.- Inclusión del informe para primer debate en el orden del día.- Las comisiones especializadas elevarán los respectivos informes a conocimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional.

ASAMBLEA NACIONAL

El Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, ordenará su distribución a los asambleístas por Secretaría General de la Asamblea Nacional.

El primer debate se desarrollará, previa convocatoria del Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, en una sola sesión y las y los asambleístas presentarán sus observaciones por escrito en el transcurso de la misma sesión o hasta tres días después de concluida la sesión.

El Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros, podrá resolver el archivo del proyecto de ley.

Art. 61.- Del segundo debate.- La comisión especializada analizará y de ser el caso recogerá las observaciones efectuadas al proyecto de ley.

Dentro del plazo de cuarenta y cinco días, contado a partir del cierre de la sesión del Pleno, la comisión especializada deberá presentar a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional el informe para segundo debate.

La comisión especializada podrá pedir justificadamente a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional la prórroga que considere necesaria para presentar el informe correspondiente. La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional determinará si concede o no la prórroga, así como el plazo de la misma.

La Presidenta o Presidente, recibido el informe para segundo debate, ordenará por Secretaría de la Asamblea Nacional, la distribución del informe a las y los asambleístas.

El segundo debate se desarrollará, previa convocatoria de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, en una sola sesión. Durante el segundo debate el o la ponente podrá incorporar cambios al proyecto de ley que sean sugeridos en el Pleno.

En el caso de negarse el informe de mayoría, el Pleno de la Asamblea, por decisión de la mayoría absoluta de sus integrantes, podrá decidir el conocimiento y votación del o los informes de minoría.

Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley, o por títulos, capítulos, secciones o artículos. Asimismo, por decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, se podrá archivar un proyecto de ley.

Art. 63.- De la remisión del proyecto de ley a la Presidenta o Presidente de la República.- Como tiempo máximo, a los dos días hábiles siguientes luego de la aprobación del proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional lo enviará a la Presidenta o Presidente de la República para que lo sancione u objete de

ASAMBLEA NACIONAL

forma fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo máximo de treinta días posteriores a su recepción por parte de la Presidenta o Presidente de la República, se promulgará la ley y se publicará en el Registro Oficial.

4. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO

4.1. Antecedentes

La Constitución de la República del Ecuador, determina entre las responsabilidades del Estado el establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitando la adquisición de medios de producción. Así mismo se establece que el sistema económico del Ecuador es social y solidario y reconoce al ser humano como sujeto y fin, garantizando la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

De igual manera, la Carta Fundamental reconoce diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas, en tal virtud promoverá la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.

Entre los objetivos de la política económica del Estado se encuentran el incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación de conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional.

Bajo estas consideraciones, el **“Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”**, tiene entre sus objetivos principales fomentar el emprendimiento y la innovación a nivel nacional como base del desarrollo productivo del Ecuador, con la participación activa de los actores públicos y privados que forman parte del ecosistema del emprendimiento, a fin de que puedan discutir, trabajar y crear espacios que ayuden a mejorar el clima de negocios de los emprendedores del país, identificando las problemáticas existentes para de esta manera poder construir estrategias que permitan superarlas.

El Proyecto de Ley también evidencia la necesidad de crear nuevas modalidades de tipo societario destinadas a los emprendedores, a través de generar una estructura, constitución y desarrollo más ágil y sencillo para la creación de las empresas denominadas SAS (Sociedad de Acciones Simplificadas). Estas nuevas sociedades promueven la digitalización de las inscripciones societarias, así como las notificaciones por la misma vía, lo que acelera significativamente los plazos de registro y modificaciones en sus estatutos. Este tipo de sociedades al simplificar su constitución terminan siendo menos costosas que las tradicionales figuras jurídicas como las sociedades anónimas y las compañías limitadas, lo

ASAMBLEA NACIONAL

cual representa un ahorro de tiempo y recursos para quienes buscan emprender, permitiendo incluso que las mismas pueden ser unipersonales.

Por otro lado, identifica que todas estas compañías tienen como denominador común la maximización de beneficios sociales en favor de sus accionistas o socios, en la actualidad este beneficio social también se traduce en la implementación de soluciones socialmente sostenibles que sean efectivas y que tengan un impacto positivo en la comunidad, al encontrarse más involucradas con su entorno social y ambiental, toda vez que la sociedad civil demanda cada vez más que los productos o servicios que consumen no solo satisfagan sus propios intereses, sino que además respeten el medio ambiente y a la comunidad en la que son producidos.

La empresa tipo B o de beneficio e interés colectivo es aquella que: *“amplía el deber fiduciario de los accionistas y gestores para incluir intereses no financieros. Su objetivo es crear un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. (...) Opera con altos estándares de gestión y transparencia, al tiempo que busca el mejor rendimiento financiero y permite la repartición de utilidades entre accionistas. Su filosofía es que la mejor manera de provocar un cambio social o ambiental es a través del mercado (...)”, considerando “las utilidades como la herramienta para lograr sus objetivos y no como un fin en sí mismas.”*¹

En este sentido, legislar sobre las empresas de beneficio e interés colectivo permite que las sociedades con fines de lucro se comprometan en actividades que beneficien a la comunidad, las cuales pueden llegar a impactar de manera positiva en su entorno a pesar de tener éxito financiero sin que existan conflictos con sus accionistas o socios, debido a que su adopción puede proporcionar nuevas oportunidades de negocios, potenciarlas en el mercado y mejorar su marca.

4.2. Análisis y debate al interior de la Comisión

El **“Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”**, se encuentra estructurado en 7 Capítulos que a su vez contiene 40 artículos; 8 Disposiciones Reformatorias; 9 Disposiciones Transitorias y una Disposición Final; cuyo objetivo consiste en establecer el marco normativo que incentive y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, que promueva una cultura emprendedora y la implementación nuevas modalidades societarias, y de financiamiento que permitan fortalecer el ecosistema emprendedor, para crear un marco interinstitucional que permita definir una política de Estado que fomente el desarrollo del emprendimiento y la innovación; facilitar la creación, operación y cierre de emprendimientos; fomentar la eficiencia y competitividad de

¹ El fenómeno de las Empresas B en América Latina. Re definiendo el éxito empresarial. FOMIN, 2012. <http://www.fomin.org/enus/Home/Knowledge/Publications/idPublication/114557.aspx>

ASAMBLEA NACIONAL

emprendedores; promover políticas públicas para el desarrollo de programas de soporte técnico, financiero y administrativo para emprendedores; fortalecer la interacción y sinergia entre el sistema educativo y actores públicos y privados del sistema productivo nacional e impulsar la innovación en el desarrollo productivo.

En este sentido, se consideró que el análisis y debate al interior de la Comisión se debería centrar en realizar una revisión del Proyecto de Ley Capítulo por Capítulo, con la finalidad de ir procesando cada una de las observaciones y aportes que realicen los diferentes asambleístas durante su discusión y de aquellos que han sido recibidos por escrito en la secretaría.

Dentro del **Capítulo I (DISPOSICIONES FUNDAMENTALES)**, el Proyecto de Ley contempla de manera general cual es su objeto, ámbito de aplicación, definiciones comunes de los términos que se utilizan a lo largo de su texto para evitar equívocos, los principios aplicables a esta Ley, y finalmente cuales son las obligaciones del Estado para garantizar el desarrollo del emprendimiento y la innovación, lo cual permite inferir a lo largo de su texto la importancia de apoyar al emprendimiento mediante políticas públicas apropiadas, que permitan crear un ecosistema de emprendimiento favorable; la simplificación de trámites para la creación, operación y cierre de empresas, en todos los niveles de gobierno, y la asignación de los recursos necesarios para implementar las políticas públicas en la materia.

Los miembros de la Comisión coincidieron en resaltar la importancia que representa para el desarrollo económico y productivo del país, contar con una Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, como una herramienta de carácter transversal, que contribuya de manera decidida a estimular la creación de nuevos emprendimientos, fortalezca el ecosistema emprendedor, la generación de empleo, la dinamización y reactivación de la economía local y nacional, a través de la creación de nuevas formas societarias ágiles que faciliten la creación y cierre de las compañías.

En el **Capítulo II (POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALIDAD DEL EMPRENDIMIENTO)**, se regula la creación, funcionamiento y atribuciones del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación – CNEI; de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación, y la Estrategia Nacional de Emprendimiento e Innovación, con la finalidad de articular y emitir la Estrategia Nacional de Emprendimiento e Innovación, alineada al Plan Nacional de Desarrollo; establecer mecanismos de seguimiento, control y monitoreo; emitir directrices o lineamientos comunicacionales, que tenga por finalidad difundir los diversos beneficios a los que pueden acogerse los emprendedores; diseñar programas y proyectos integrales que fomenten el emprendimiento y la innovación, que por ser de aplicación transversal no puedan ser aprobados por los respectivos entes rectores de cada sector; elaborar políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura

ASAMBLEA NACIONAL

emprendedora, y coordinar la interacción y sinergia entre actores públicos relacionados con el manejo de trámites, financiamiento, investigación y apertura de mercados.

Producto de las discusiones al interior de la Comisión, sus miembros consideraron la necesidad introducir modificaciones a su texto original, en lo que tiene que ver con la conformación del referido Consejo, al incluir o modificar algunos de sus miembros, por las implicaciones en la articulación y emisión de la Estrategia Nacional de Emprendimiento e Innovación, y en la elaboración de políticas, directrices, programas y proyectos orientados al fomento de la cultura emprendedora, determinándose su conformación de la siguiente manera:

- a) El Ministerio rector de la Producción, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;
- b) El Ministerio rector de Trabajo;
- c) El Ministerio rector de Turismo;
- d) El Ministerio rector de Finanzas;
- e) Servicio Nacional de Derechos Intelectuales;
- f) La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;
- g) El Instituto de la Economía Popular y Solidaria;
- h) El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales;
- i) La Asociación de Municipalidades del Ecuador; y,
- j) El Consejo Consultivo del Emprendimiento e Innovación.

Respecto del **Capítulo III (FOMENTO AL EMPRENDEDOR Y CREACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS)**, se establece la creación del Registro Nacional de Emprendimiento -RNE-, a cargo del Servicio de Rentas Internas, como una instancia de coordinación interinstitucional en materia de emprendimiento e innovación en el país, sin la necesidad de crear cargos administrativos y gastos adicionales para el Estado.

La posibilidad de que ente rector de la gestión inmobiliaria del sector público brinde apoyo mediante el arrendamiento a precio preferencial de instalaciones, infraestructuras o establecimientos que puedan ser usados para la creación de centros de apoyo, desarrollo y/o aceleradoras de emprendimientos.

La generación de una guía nacional de emprendimiento por parte de la Secretaría Técnica del CNEI, para que provea al menos la siguiente información: macro económicos, legales, tributarios, sectoriales, laborales, societarios y financieros del ecosistema emprendedor, además de un directorio de las oficinas comerciales del Ecuador en el mundo, con información de cómo exportar productos y servicios.

Establecer una política de promoción comercial de emprendimientos a nivel internacional, a través del ente rector de Comercio Exterior, para la promoción comercial de productos y

ASAMBLEA NACIONAL

servicios de emprendedores que se encuentren en el RNE, a través de las oficinas comerciales del Ecuador en el exterior.

Los miembros de la Comisión han considerado fundamental el trabajo conjunto que se debe generar entre el sector público y privado en este proceso, específicamente el apoyo de las diferentes entidades del Estado en la construcción de una política nacional de emprendimiento, la promoción comercial de emprendimientos a nivel internacional, el arrendamiento de instalaciones, infraestructuras o establecimientos para que puedan ser usados en la creación de centros de apoyo, desarrollo y/o aceleradoras de emprendimientos, la creación de una guía nacional de emprendimiento, y por supuesto la creación de un Registro Nacional de Emprendimiento -RNE-, con la finalidad de contar con un registro nacional único de emprendedores en el país.

Por su parte, el **Capítulo IV (FOMENTO A LA CULTURA Y EDUCACIÓN EMPRENDEDORA)**, busca promover el establecimiento de una formación teórica y práctica para el emprendimiento, que permita fortalecer actitudes y aptitudes en el estudiante en esta rama de conocimiento para adaptarse a las nuevas tendencias, tecnologías y al avance de la ciencia, con el objetivo de mejorar las capacidades, habilidades y destrezas que permitan emprender con éxito iniciativas productivas; promover el acercamiento de las instituciones educativas al sector productivo y formarse en la cultura de la cooperación, ahorro e inversión.

Para cumplir con este objetivo, el Ministerio de Educación y la SENECYT, velará porque en los niveles de educación secundaria y de tercer nivel, se establezcan mallas curriculares que incluyan contenidos y criterios de evaluación de la formación, orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor e innovador, desarrollo de competencias para el emprendimiento basadas en el crecimiento personal del estudiante, la responsabilidad ambiental y social, la ética empresarial, autoconfianza, toma de decisiones, toma de riesgos calculados, creación de valor, liderazgo, creatividad, resolución de conflictos y demás necesarias para formar el “ser” y el “saber hacer” del emprendedor.

Se propiciará por parte de las Universidades, Escuelas Politécnicas Nacionales e Institutos Técnicos de Educación Superior el establecimiento como alternativa a los trabajos de titulación el desarrollo de planes de negocios dependiendo de la carrera que se opte. Se promoverán espacios para la presentación, difusión y promoción de proyectos de emprendimiento, para que el alumnado participe en actividades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor e innovador y la iniciativa empresarial a partir del desarrollo de aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENECYT, promoverá el desarrollo de una cultura emprendedora en las Universidades, Escuelas Politécnicas

ASAMBLEA NACIONAL

Nacionales e Institutos Técnicos de Educación Superior, para efectos de la acreditación de estos centros o entidades de educación superior en el país.

Bajo estas consideraciones, los assembleístas miembros de la Comisión, reiteraron que es fundamental para cumplir con los objetivos que se propone este Proyecto de Ley, establecer como una política pública, en los niveles de educación secundaria, de tercer nivel y universitaria, mallas curriculares y la formación que incluya contenidos y criterios de evaluación de la formación, orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor e innovador, toda vez que desde la aulas escolares y universitarias se debe promover y estimular el espíritu emprendedor e innovador en los jóvenes, la iniciativa empresarial, el desarrollo de aptitudes como la creatividad, la iniciativa y el trabajo en equipo.

En el Capítulo V (**FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS**), se consideran aspectos relevantes como el acceso preferente a los servicios financieros y a los fondos de inversión públicos, a través capital semilla, capital de riegos e inversión ángel; la posibilidad de colocar activos intangibles (calificación y registro) en el sistema financiero nacional, como garantía para las operaciones de crédito de emprendimientos, mismas que estarían respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías administrado por la Corporación Financiera Nacional, para lo cual la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá los parámetros y condiciones requeridos para el efecto

Para los miembros de la Comisión, se consideró fundamental el tratamiento y establecimiento dentro del Proyecto de Ley, de un capítulo dedicado al financiamiento y garantías para impulsar este tipo de actividades, teniendo en cuenta las realidades que aquejan a los jóvenes que buscan oportunidades para desarrollar sus propios negocios y a los emprendimientos en el país, donde se evidencia una alta tasa de emprendimientos en el país frente a los demás países de la región, sin embargo existe un alta tasa de fracaso que impide que muchos de ellos alcance su primer año de funcionamiento, lo cual evidencia indudablemente las deficiencias que existen en el sistema para crear nuevos emprendimientos, contar con líneas de crédito para iniciar o ampliar negocios, excesiva tramitología y burocracia para constituir compañías, etc. Lo cual torna prioritario el trabajo articulado entre el sector público y privado para establecer líneas de crédito preferentes que estimulen la creación de diversas fuentes de financiamiento para impulsar el emprendimiento en el país.

Por otro lado, en el **Capítulo VI (FONDOS COLABORATIVOS O CROWDFUNDING)** se establece una amplia regulación sobre las plataformas de fondos colaborativos o “crowdfunding”, su regulación, control, requisitos, clasificación de las plataformas, servicios, comisiones, obligaciones, prohibiciones, clasificación de proyectos en las plataformas de fondos colaborativos, recaudación de recursos en las plataformas de fondos colaborativos, plazo máximo de publicación en las plataformas de fondos colaborativos y de la transferencia de recursos de fondos colaborativos.

ASAMBLEA NACIONAL

Por las implicaciones de carácter económico y jurídico que representa la promoción de proyectos y manejo de recursos por este tipo de plataformas de fondos colaborativos o “crowdfunding”, los miembros de la Comisión al discutir sobre el alcance y servicios que brindarían las mismas en el mercado, concluyeron en la necesidad de establecer un capítulo completo con relación a la regulación de estas plataformas, ya que las mismas permiten conectar promotores públicos, privados o de la economía popular y solidaria, que requieren capital para un determinado proyecto, con o sin ánimo de lucro, con otras personas, denominadas inversores, interesadas en aportar sus recursos para la consecución de dichos proyectos, razón por la cual es necesaria establecer una regulación de sus condiciones, requisitos, funcionamiento, recaudación y transferencia de recursos de los fondos colaborativos, toda vez que las mismas buscan recibir, clasificar y publicitar proyectos de fondos colaborativos; crear, desarrollar y utilizar canales para facilitar la entrega de información de los proyectos de fondos colaborativos a los inversores y proveer funciones de búsqueda o categorización de la información exclusivamente en base a criterios de clasificación de objetivos, por lo cual se requiere su supervisión y control por parte de una entidad del estado, como lo es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, al ser plataformas creadas en el Ecuador a través de sociedades mercantiles legalmente constituidas, cuyo objeto social debe establecer la posibilidad de actuar como intermediario, mediante plataformas de internet de personas que se denominan promotores, que requieren capital para un determinado proyecto, con o sin ánimo de lucro, con otras personas, denominadas inversores, interesados en aportar sus recursos para la consecución de dichos proyectos bajo determinadas condiciones.

En el **Capítulo VII (CONDICIONES LABORALES)**, se estableció la necesidad de facultar al ente rector en materia de trabajo en el país, la creación de un régimen especial de contratación del personal para el emprendimiento, con el objetivo de incentivar la generación de empleo y la formalización del trabajo en los procesos de emprendimiento, donde se desarrollará la modalidad o modalidades contractuales a implementarse en el trabajo emprendedor, como la jornada parcial, así como el tiempo de duración de los contratos, pago de beneficios de ley, remuneración y su forma de cálculo, afiliación a la seguridad social, y demás requisitos y condiciones que deberá cumplir el empleador/a y/o trabajador/a. En relación a las **Disposiciones Reformatorias**, es preciso señalar que se consideró necesario introducir un importante, profunda y necesaria reforma a la Ley de Compañías, con la finalidad de modernizar y permitir crear nuevas modalidades societarias que faciliten e incentiven la creación de nuevos emprendimientos con una estructura, constitución y desarrollo más ágil y sencillo para la creación de empresas de las denominadas Sociedad de Acciones Simplificada (SAS), donde se promueven la digitalización de las inscripciones societarias, así como las notificaciones por la misma vía, lo que acelera significativamente los plazos de registro y modificaciones en sus estatutos, y representa menos costos para el usuario a diferencia de las

ASAMBLA NACIONAL

tradicionales figuras societarias como son las sociedades anónimas o las compañías limitadas, ahorrando tiempo y permitiendo incluso que las mismas pueden ser unipersonales.

Dentro de las necesarias reformas que se busca realizar a este cuerpo normativo por la Comisión, para incorporar como una nueva modalidad societaria a la Sociedad de Acciones Simplificada, se requiere efectuar una amplia regulación referente a su forma de constitución, limitación de responsabilidades; prohibiciones; reglas sobre el capital y las acciones; valor nominal y capital mínimo; aporte de bienes; aumento de capital; derecho de preferencia, derecho a voto; transferencia de acciones; restricciones a la negociación de acciones; autorización para la transferencia de acciones, organización de la sociedad; reuniones de los órganos sociales; convocatoria a asamblea de accionistas; quórum de instalación y decisión en la asamblea de accionistas; presidente y secretario de las asambleas de accionistas; asambleas universales; acuerdo de accionistas; junta directiva; representación legal; reformas estatutarias y reorganización de la sociedad; proceso de transformación, fusión y escisión; derecho de separación; proceso de disolución, liquidación, reactivación y cancelación de las Sociedades por Acciones Simplificadas; aprobación de estados financieros; exclusión de accionistas; acceso a la información societaria; intervención administrativa de las sociedades por acciones simplificadas; control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre otros aspectos que merecieron el análisis por parte de los miembros de la Comisión, para ser considerados dentro de las reformas a efectuarse a la Ley de Compañías.

Otra importante reforma, que fue considerada y analizada por los diferentes miembros de la Comisión, durante los debates para el tratamiento de este Proyecto de Ley, fue la referente a la incorporación dentro de la Ley de Compañías a las sociedades de beneficio e interés colectivo, que son aquellas compañías que al desarrollar sus actividades operacionales en beneficio de los intereses de sus socios o accionistas, se obligan a generar un impacto social positivo, en procura del interés de la sociedad y del medio ambiente, lo cual no implica, de ninguna forma, la transformación a una especie societaria distinta a la originalmente adoptada, o la creación de una nueva sociedad mercantil, siendo necesaria para este efecto regular de forma completa su proceso de constitución, definición, objeto, denominación, reformas estatutarias y obtención de la calidad de sociedad de beneficio e interés colectivo; así como las áreas de impacto de las sociedades de beneficio e interés colectivo; el informe de impacto de gestión; la ampliación del deber fiduciario de los administradores, gestores y directores; la exigencia judicial de cumplimiento de los deberes de beneficio colectivo y la pérdida de la categoría de sociedad de beneficio e interés colectivo.

Dentro de las Disposiciones Transitorias se establecieron por los miembros de la Comisión, algunas particularidades que deberían ser incluidas como encargo a las diferentes entidades del Estado, a efectos de garantizar el cumplimiento y plena vigencia de esta importante iniciativa de Ley, al momento de su entrada en vigencia producto de su publicarse en el Registro Oficial, luego de cumplirse con el procedimiento legislativo previsto en la

Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como son la expedición de su reglamento general; la creación del Registro Nacional de Emprendedores; el establecimiento de procedimientos simplificados en los servicios con tasas preferenciales para emprendedores; emitir un proceso simplificado de notificación sanitaria para la comercialización de: alimentos procesados, aditivos alimentarios, cosméticos, productos higiénicos, nutracéuticos, homeopáticos, plaguicidas para uso doméstico e industrial y otros insumos de uso y consumo humano, fabricados en el territorio nacional para su comercialización y expendio; implementar parámetros de evaluación y participación para emprendedores en las distintas modalidades de contratación pública; establecer parámetros y condiciones a ser considerados en las distintas fuentes alternativas de financiamiento y garantías; establecer una modalidad de afiliación especial para el personal que labore para emprendedores, en función de las modalidades de contratos de emprendimiento creadas para el efecto por el ente rector en materia laboral del país.

Adicionalmente, es importante señalar que, además de los proyectos de ley que ocupan este informe, existen dos proyectos de ley relacionados con la materia que fueron propuestos por la asambleísta Mae Montaña Valencia: el “Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento del Emprendimiento” y el “Proyecto de Ley Orgánica de Defensa de Emprendedores Urbanos”, mismos que fueron unificados y cuentan con Informe para Primer Debate desde el año 2015 y que no han sido debatidos por el Pleno de la Asamblea Nacional, toda vez que la Sesión No. 325 fue suspendida. En consecuencia, la Comisión ha considerado oportuno solicitar que los mismos sean devueltos a la Comisión para ser unificados con todos los proyectos de ley relacionados con la materia, a fin de que se integren en un solo cuerpo normativo para su tratamiento y discusión por esta mesa legislativa.

Finalmente, los miembros de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, dejaron sentado el hecho de que el Proyecto de Ley en mención fue ampliamente discutido y debatido al interior de la Comisión, durante las sesiones de trabajo mantenidas por sus miembros, obteniéndose e incluyéndose importantes aportes, observaciones y mejoras en la redacción de su texto final para ser considerado por el Pleno de la Asamblea Nacional.

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

La Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, considera necesaria la reforma planteada y sobre las base de los argumentos antes expuestos, pone en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el **Informe para Primer Debate del “Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”**, el mismo que fue conocido, debatido y aprobado en la Sesión No. 006 de 24 de julio de 2019.

6. RESOLUCIÓN

Por las motivaciones constitucionales y legales expuestas, así como las señaladas en la Sesiones: en el desarrollo de las Sesiones: Sesión No. 087 de 06 de febrero de 2019; Sesión No. 091 de 27 de marzo de 2019; Sesión No. 092 de 10 de abril de 2019; Sesión No. 094 de 24 de abril del 2019; Sesión No. 096 de 08 mayo de 2019; Sesión No. 099 de 29 mayo de 2019; Sesión No. 100 de 05 junio de 2019; Sesión No. 001 de 12 junio de 2019; Continuación de la Sesión No. 003 de 10 de julio del 2019, Sesiones No. 005 y 006 de 17 y 24 de julio de 2019, respectivamente; esta Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, **RESUELVE** aprobar por unanimidad el presente **Informe para Primer Debate del “Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”**, con doce (12) votos a favor; cero (0) en contra; cero (0) abstenciones; cero (0) blancos de las y los asambleístas presentes.

7. ASAMBLEÍSTA PONENTE

El asambleísta Esteban Albornoz Vintimilla, presidente y miembro de ésta Comisión Especializada, es designado como ponente del Proyecto de Ley y del presente Informe.

**LAS SEÑORAS Y LOS SEÑORES ASAMBLEÍSTAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE INFORME
PARA PRIMER DEBATE DEL "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN"**



Esteban Albornoz Vintimilla
PRESIDENTE



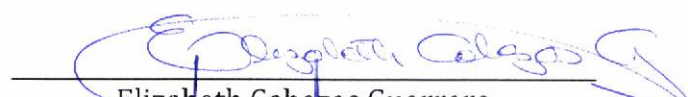
Homero Castanier Jaramillo
VICEPRESIDENTE



Fernando Burbano Montenegro
MIEMBRO



Rubén Bustamante Monteros
MIEMBRO



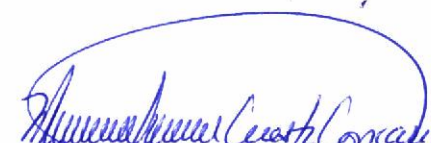
Elizabeth Cabezas Guerrero
MIEMBRO



Fernando Callejas Barona
MIEMBRO



Guillermo Celi Santos
MIEMBRO




Maria Mercedes Cuesta Concari
MIEMBRO




Carmen Rivadeneira Bustos
MIEMBRO



César Rohon Hervás
MIEMBRO



Joaquín Peña Bernal
MIEMBRO



Mariano Zambrano Vera
MIEMBRO

Mauricio Zambrano Valle
MIEMBRO

**COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO
ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA**

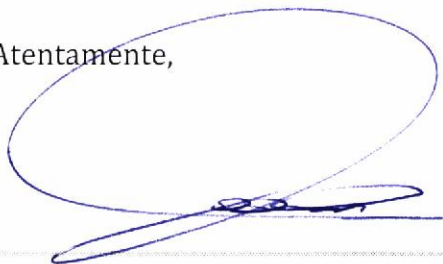
En mi calidad de Secretario Relator de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

CERTIFICO:

Que, el presente **Informe para Primer Debate del “Proyecto de Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación”**, fue conocido, debatido y aprobado en la Sesión No. 006 de 24 de julio de 2019, en el pleno de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, con la votación de las y los siguientes asambleístas: Esteban Albornoz Vintimilla, Homero Castanier Jaramillo; Rubén Bustamante Monteros; Fernando Callejas Barona; Guillermo Celi Santos; Carmen Rivadeneira Bustos; César Rohon Hervas; Mariano Zambrano Vera; Fernando Burbano Montenegro; María Mercedes Cuesta; Elizabeth Cabezas Guerrero; y, Joaquín Peña Bernal (alterno), con la siguiente votación: **AFIRMATIVO**: doce (12). **NEGATIVO**: cero (0). **ABSTENCIÓN**: cero (0). **BLANCO**: cero (0). **ASAMBLEÍSTAS AUSENTES**: uno (1): Mauricio Zambrano Valle.

Quito DM, 24 de julio de 2019.

Atentamente,



Ab. Pedro Cornejo Espinoza
**SECRETARIO RELATOR DE LA COMISIÓN
ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL DESARROLLO
ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y LA MICROEMPRESA.**

ASAMBLEA NACIONAL

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de la República del Ecuador, determina que entre las responsabilidades del Estado se encuentra establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitando la adquisición de medios de producción. Así mismo se establece que el sistema económico del Ecuador es social y solidario y reconoce al ser humano como sujeto y fin, garantizando la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir

La Constitución del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas, en tal virtud busca promover la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.

Entre los objetivos de la política económica del Estado, se encuentra incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación de conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional.

Para ello es necesario fomentar el emprendimiento y la innovación a nivel nacional como base del desarrollo productivo del Ecuador, para lo cual se debe contar con la participación activa de los actores públicos y privados que forman parte del ecosistema del emprendimiento, a fin de que puedan discutir, trabajar y crear espacios que ayuden a mejorar el clima de negocios de los emprendedores del país, identificando las problemáticas existentes y sus posibles alternativas o soluciones

La percepción de cómo ven las instituciones formales de la sociedad a los emprendedores y empresas, es un componente muy importante dentro del marco normativo en el que los emprendedores y las firmas operan e incide en su contribución al desarrollo de la sociedad. En el país existen varias instituciones que apoyan y promueven el emprendimiento, entre ellas está la Alianza por el Emprendimiento e Innovación (AEI), la misma que ha sido un actor muy importante en la construcción del proyecto de la Ley de Emprendimiento e Innovación.

Según el reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2014, la actividad emprendedora esta conformada por dos grandes grupos: uno individual, que permite a las personas iniciar o contribuir a la apertura de un negocio, y otro grupo vinculado a los factores de contexto o medioambientales, que influyen en el desarrollo de la cultura emprendedora. Las potencialidades están fuertemente vinculadas con el tejido de instituciones (privadas, públicas, académicas o de la sociedad civil), el financiamiento, las políticas públicas y los

ASAMBLEA NACIONAL

instrumentos que permiten alentar la actividad emprendedora en el desarrollo de todo su ecosistema.

En el Ecuador, la propensión a emprender y la percepción del emprendedor por parte de la sociedad están entre las más altas del mundo, según varios reportes internacionales como el del Global Entrepreneurship Monitor (GEM). El ciclo 2017 del GEM Ecuador, recogió información de 2,060 personas en edad adulta y de 37 expertos nacionales, lo que permitió identificar y analizar las características de la actividad emprendedora en el país. Los resultados muestran que, en el 2017, alrededor de 3 millones de adultos empezaron el proceso de puesta en marcha de un negocio (emprendimiento naciente) o poseían uno con menos de 42 meses de antigüedad (emprendimiento nuevo), lo que representa el 29.6% de la población entre 18 y 64 años, siendo ésta la TEA (tasa de emprendimiento temprano) más alta de la región por sexto año consecutivo, seguido por Perú y Chile, pese a que ha decrecido gradualmente hasta 6 puntos porcentuales desde el 2013, persisten las dificultades para que un emprendimiento supere la barrera de los 3 meses de operación. Los problemas de financiamiento y falta de rentabilidad fueron las principales razones de discontinuación según el GEM Ecuador 2017.

Además se indica en el informe que el 33.4% de los emprendedores tienen un empleo adicional a su negocio y el 50.2% es auto empleado. En el año 2018, el GEM introduce el GESI o índice de espíritu emprendedor, en el cual se obtiene el segundo mejor puntaje de la región (0.28) después de Perú, evidenciando una percepción positiva frente al emprendimiento y una alta autoconfianza en las capacidades o conocimientos necesarios para emprender. Sobre las motivaciones que tienen las personas para iniciar una actividad emprendedora, en el 2017 la proporción de la TEA que emprende por oportunidad supera a los de necesidad (57.31% vs. 42.33%), que es la más alta en todo el periodo estudiado para Ecuador por parte del GEM. La tasa de cierre de negocios no ha variado respecto al 2016, pero sigue siendo más baja que para 2012-2015. El 99% de los emprendimientos nacientes, el 60% de los negocios nuevos y el 51.5% de los negocios establecidos no generan empleo.

El índice internacional del Doing Business Index, coloca a Ecuador en el puesto 168 entre 190 países, cuando mide el número de procedimientos, tiempo y costo para que una compañía de responsabilidad limitada pequeña y mediana inicie y opere formalmente. Y no solo empezar un emprendimiento es difícil, maximizar su duración, resultados económicos y sociales y, principalmente, potenciar el acceso al mercado extranjero son grandes retos a los que los emprendedores ecuatorianos se enfrentan muchas veces con resultados negativos.

El Proyecto de Ley evidencia la necesidad de que los emprendedores puedan contar con nuevas modalidades societarias que faciliten e incentiven la creación de nuevos emprendimientos con una estructura, constitución y desarrollo más ágil y sencillo para la creación de empresas Sociedad de Acciones Simplificada (SAS), siempre pensando en beneficio del emprendedor. Estas nuevas sociedades promueven la digitalización de las

ASAMBLEA NACIONAL

inscripciones societarias, así como las notificaciones por la misma vía, lo que acelera significativamente todos los plazos de registro y modificaciones en los estatutos.

Este tipo de sociedades al simplificar su proceso de constitución terminan siendo menos costosas que las tradicionales figuras societarias como las sociedades anónimas o las compañías limitadas, ahorrando tiempo al emprendedor y permitiendo incluso que las mismas pueden ser unipersonales.

Por otro lado, el Proyecto de Ley también identifica que todas las compañías tienen como denominador común la maximización de beneficios sociales en favor de sus accionistas o socios. En la actualidad este beneficio social también se traduce en implementar soluciones socialmente sostenibles que sean efectivas y que tengan un impacto positivo en la comunidad. Es decir, cada vez se encuentran más involucradas con su entorno social y ambiental, toda vez que la sociedad civil demanda cada vez más que los productos o servicios que consumen no solo satisfagan sus propios intereses, sino que además respeten el medio ambiente y a la comunidad en la que son producidos.

Existe un tipo de sociedades constituidas para el beneficio de la comunidad, como lo son las Community Interest Companies de Reino Unido o las empresas sociales en Italia que se definen en la ley 118 de dicho país como: *“organizaciones privadas sin fines de lucro que ejercen como actividad principal y de manera constante una actividad económica y de producción de bienes y servicios de utilidad social para la realización de objetivos de interés general”*. Sin embargo, muchas de estas organizaciones privadas son sociedades sin fines de lucro que se dedican únicamente a fines sociales, por lo cual no son atractivas para realizar una inversión y no generan utilidades atractivas ni nuevas oportunidades en el ámbito empresarial. Pese a que es una buena alternativa para ejecutar proyectos sociales, no es una forma totalmente eficiente de generar los suficientes recursos como para hacer toda la obra social que se necesita en realidad.

Por el contrario, la empresa B o de beneficio e interés colectivo es aquella que: *“amplía el deber fiduciario de los accionistas y gestores para incluir intereses no financieros. Su objetivo es crear un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. (...) Opera con altos estándares de gestión y transparencia, al tiempo que busca el mejor rendimiento financiero y permite la repartición de utilidades entre accionistas. Su filosofía es que la mejor manera de provocar un cambio social o ambiental es a través del mercado (...)”, considerando “las utilidades como la herramienta para lograr sus objetivos y no como un fin en sí mismas.”*²

2 El fenómeno de las Empresas B en América Latina. Re definiendo el éxito empresarial. FOMIN, 2012
<http://www.fomin.org/enus/Home/Knowledge/Publications/idPublication/114557.aspx>

ASAMBLEA NACIONAL

Si bien cualquier sociedad mercantil puede obtener una certificación de empresa tipo B a través de entidades privadas, el Ecuador carece de una normativa legal o reglamentaria que no solo le otorgue esta calidad sino que además regule la exigibilidad del cumplimiento de su obligación a crear un impacto material positivo en la sociedad y el medio ambiente.

Legislar sobre la constitución de empresas de beneficio e interés colectivo además facilita que las sociedades con fines de lucro se comprometan en actividades que benefician a la comunidad, las cuales pueden llegar a impactar su éxito financiero sin que existan conflictos con sus accionistas o socios, debido a que su adopción puede proporcionar nuevas oportunidades de negocios, potenciarlas en el mercado social y medio ambiental y mejorar su marca.

En este contexto, pese a los esfuerzos del Gobierno Central al implementar políticas públicas que han contribuido con el desarrollo del ecosistema emprendedor nacional, es importante indicar la necesidad de que el Ecuador cuente con una legislación apropiada en materia de fomento al emprendimiento, que permita articular esfuerzos de distintos actores, públicos y privados para el desarrollo de nuevos emprendimientos y el desarrollo del ecosistema emprendedor, así como para la duración en el tiempo de ellos, buscando mejorar las condiciones de vida de sus colaboradores, comunidad, familia, amigos y consumidores.

ASAMBLEA NACIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

CONSIDERANDO

- Que,** el artículo 120, numeral 6, de la Constitución de la República dispone que es competencia de la Asamblea Nacional *“expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”*;
- Que,** de acuerdo con el artículo 66, numeral 15, de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce y garantiza a las personas *“el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”*;
- Que,** el artículo 66, numeral 26, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce *“el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental”*;
- Que,** según el artículo 321 de la Carta Magna, *“el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental”*;
- Que,** el artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que uno de los objetivos del régimen de desarrollo es: *“Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable”*;
- Que,** en el artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador señala que para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: *“Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza”*, así como también *“Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la Ley”*;
- Que,** el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: *“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la*

ASAMBLEA NACIONAL

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.- El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria”;

- Que,** en el artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador, en sus numerales 6 y 7, indica que entre los objetivos de la política económica se encuentran los siguientes: *“impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respecto a los derechos laborales”; y, “mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleos sostenibles en el tiempo”;*
- Que,** mediante reformas legales introducidas en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del sector Societario Bursátil publicada en Registro Oficial Suplemento 249 de 20 de Mayo del 2014, se redujo el tiempo para constitución de compañías;
- Que,** el ser humano tiene derecho a la libre asociación, libertad de contratación, libertad de trabajo, libertad de empresa y demás derechos subyacentes a la realización de actividades económicas, reconocidos en convenios y tratados internacionales, así como en la Constitución y más normas nacionales;
- Que,** Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, UNCITRAL, por sus siglas en inglés, ha planteado varias leyes modelo sobre ámbitos materia del fomento al emprendimiento y la innovación;
- Que,** Ecuador ha alcanzado importantes posiciones en índices internacionales sobre emprendimiento, como por ejemplo el Global Entrepreneurship Monitor que, para el año 2017, ubica a Ecuador como el segundo país con el mayor índice de espíritu emprendedor (28%), solo después de Perú;
- Que,** resulta necesario fomentar un entorno propicio para la formación de compañías y para que los emprendimientos sean formalizados, y para facilitar que emprendedores y organizaciones ya existentes encuentren un entorno propicio para crear nuevos emprendimientos;
- Que,** los cambios experimentados en los órdenes económicos y social por el modelo de globalización, internacionalización de las economías y apertura de los mercados, en el cual tiene el país que necesariamente insertarse, imponen la obligación de reconocer un nuevo tipo societario que viabilice el derecho de asociación con fines económicos, sin las formalidades exigidas para la constitución de compañías, de acuerdo con la Ley de la materia; y,

ASAMBLEA NACIONAL

Que, se requiere una ley para facilitar y armonizar la participación de actores públicos y privados del ecosistema emprendedor, que facilite y estimule el desarrollo de emprendimientos, así como maximizar su duración, sus resultados económicos y sociales y, principalmente, potenciar su acceso al mercado nacional y extranjero siempre en beneficio del desarrollo del Ecuador;

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 120, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, y el artículo 9, numeral 6, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expide la siguiente:

LEY ORGÁNICA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 1.- Objeto y ámbito.- La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo que incentive y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la cultura emprendedora e implementando nuevas modalidades societarias y de financiamiento para fortalecer el ecosistema emprendedor.

El ámbito de esta ley se circunscribe a todas las actividades de carácter público o privado, vinculadas con el desarrollo del emprendimiento y la innovación.

Artículo 2.- Objetivos de la ley. - Son objetivos de esta Ley los siguientes:

- a) Crear un marco interinstitucional que permita definir una política de Estado que fomente el desarrollo del emprendimiento y la innovación;
- b) Facilitar la creación, operación y liquidación de emprendimientos;
- c) Fomentar la eficiencia y competitividad de emprendedores;
- d) Promover políticas públicas para el desarrollo de programas de soporte técnico, financiero y administrativo para emprendedores;
- e) Fortalecer la interacción y sinergia entre el sistema educativo y actores públicos y privados del sistema productivo nacional; y,
- f) Impulsar la innovación en el desarrollo productivo.

Artículo 3.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

1. **Emprendimiento.-** Es un proyecto con antigüedad menor a cinco años que requiere recursos para cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad y que necesita ser organizado y desarrollado, tiene riesgos y su finalidad es generar utilidad, empleo y desarrollo.

ASAMBLEA NACIONAL

2. **Innovación.-** Es el proceso creativo mediante el cual se introduce un nuevo o significativamente mejorado bien, servicio o proceso con valor agregado.
3. **Emprendedor.-** Son personas naturales o jurídicas que persiguen un beneficio, trabajando individual o colectivamente. Pueden ser definidos como individuos que innovan, identifican y crean oportunidades, desarrollan un proyecto y organizan los recursos necesarios para aprovecharlo.
4. **Ecosistema emprendedor.-** Es todo el entorno que facilita, incluye y fomenta el desarrollo de empresas y proyectos en un lugar determinado.
5. **Cultura emprendedora.-** Es el conjunto de cualidades, conocimientos y habilidades necesarias que posee una persona para gestionar un emprendimiento.
6. **Capital semilla.-** Es la inversión de recursos en la fase inicial de un proyecto, desde su concepción hasta el desarrollo de un proyecto innovador.
7. **Capital de riesgo.-** Es la inversión que consiste en la participación, de manera temporal y minoritaria, en el capital social de un emprendimiento. El aportante invierte en un proyecto convirtiéndose en socio-accionista del emprendimiento financiado y de esta manera participa de modo directo en los riesgos y resultados.
8. **Plataformas de fondos colaborativos o “crowdfunding”.-** Son sociedades mercantiles cuyo objeto social es la financiación de proyectos a través plataformas desarrolladas sobre la base de nuevas tecnologías, que ponen en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento.
9. **Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S).-** Tipo de sociedad mercantil creada para constituir una micro o pequeña empresa a través de medios tecnológicos y de manera gratuita, a fin de eliminar la informalidad, simplificar su proceso de constitución, constituir un nuevo régimen societario formado por uno o más accionistas, instaurar un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales correspondientes, y fomentar el crecimiento de estas empresas para que adopten en el futuro formas más sofisticadas de operación y administración.
10. **Sociedades de beneficio e interés colectivo.-** Son aquellas compañías que al desarrollar sus actividades operacionales en beneficio de los intereses de sus socios o accionistas, se obligan a generar un impacto social positivo en procura del interés de la sociedad y del medio ambiente.

ASAMBLEA NACIONAL

Artículo 4.- Principios.- Son principios de esta Ley los siguientes:

1. **Articulación.-** Es la sinergia entre actores públicos, privados y academia para el desarrollo del ecosistema emprendedor e innovador.
2. **Desarrollo económico.-** Favorecer el desarrollo económico a partir del emprendimiento y la innovación, de manera justa, democrática, productiva, solidaria y sostenible, basado en la generación de riqueza, trabajo digno y estable.
3. **Celeridad.-** Los trámites y procedimientos se deben ejecutar de forma eficiente con calidad y en el menor tiempo posible.
4. **Transparencia.-** Garantizar el derecho a acceder a las fuentes de información pública.
5. **Formación integral.-** En aspectos y valores como: desarrollo del ser humano, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y estímulo a la investigación y aprendizaje permanente.

Artículo 5.- Obligaciones del Estado.- Son obligaciones del Estado para garantizar el desarrollo del emprendimiento y la innovación, las siguientes:

1. Apoyar al emprendimiento mediante políticas públicas apropiadas, que permitan crear un ecosistema favorable;
2. Simplificar trámites para la creación, operación y cierre de empresas, en todos los niveles de gobierno; y,
3. Asignar los recursos necesarios para implementar las políticas públicas que se emitan en aplicación de esta Ley.

CAPÍTULO II

POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALIDAD DEL EMPRENDIMIENTO

Artículo 6. Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación.- Créase el Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación – CNEI, para la coordinación interinstitucional en materia de emprendimiento e innovación, el mismo que estará conformado por las máximas autoridades de las siguientes instituciones:

- k) El Ministerio rector de la Producción, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;
- l) El Ministerio rector de Trabajo;
- m) El Ministerio rector de Turismo;
- n) El Ministerio rector de Finanzas;
- o) Servicio Nacional de Derechos Intelectuales;

ASAMBLEA NACIONAL

- p) La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;
- q) El Instituto de la Economía Popular y Solidaria;
- r) El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales;
- s) La Asociación de Municipalidades del Ecuador; y,
- t) El Consejo Consultivo del Emprendimiento e Innovación.

Las resoluciones del CNEI serán de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio.

Cuando lo considere pertinente, el CNEI podrá convocar a actores de los sectores público y/o privado, quienes tendrán derecho a voz.

La conformación y funcionamiento del Consejo Consultivo del Emprendimiento e Innovación será definida en el reglamento de esta Ley y se estructurará conforme a lo dispuesto por el Artículo 100 de la Constitución de la República.

Artículo 7. Secretaría Técnica del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación.- El CNEI contará con una Secretaría Técnica que dará seguimiento a las resoluciones emitidas y coordinará acciones con las instituciones y entidades que lo conforman.

Las funciones de la Secretaría Técnica las ejercerá la Subsecretaría del Ministerio rector de la Producción a cargo del emprendimiento.

Artículo 8. Funcionamiento del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación.- El CNEI se reunirá bimestralmente de manera ordinaria, pudiendo celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran.

El Consejo podrá sesionar con la presencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros que lo conforman, la presencia del Presidente es de carácter obligatoria; los miembros del Consejo tienen igualdad de derechos y obligaciones.

El Presidente por medio de Secretaría Técnica convocará a las sesiones ordinarias con al menos 72 horas de anticipación y en el caso de las sesiones extraordinarias podrá hacerlo con al menos 24 horas de anticipación.

Artículo 9. Atribuciones del CNEI.- Serán atribuciones del Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación las siguientes:

- a) Emitir la Estrategia Nacional de Emprendimiento e Innovación, alineada al Plan Nacional de Desarrollo, acorde a los principios y lineamientos establecidos en la

ASAMBLEA NACIONAL

presente Ley, y establecer los mecanismos de seguimiento, control y monitoreo correspondientes,

- b) Emitir directrices o lineamientos comunicacionales, que tenga por finalidad difundir los diversos beneficios a los que pueden acogerse los emprendedores;
- c) Diseñar programas y proyectos integrales que fomenten el emprendimiento y la innovación, que por ser de aplicación transversal no puedan ser aprobados por los respectivos entes rectores de cada sector;
- d) Elaborar políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura emprendedora;
- e) Solicitar y aprobar los informes técnicos que, sobre el ámbito de su competencia, fueren requeridos por el Presidente de la República; y,
- f) Coordinar la interacción y sinergia entre actores públicos relacionados con el manejo de trámites, financiamiento, investigación y apertura de mercados.

Artículo 10. Estrategia Nacional de Emprendimiento e Innovación.- La Estrategia Nacional de Emprendimiento e Innovación se elaborará por el CNEI, con un horizonte de 5 años y podrá ser actualizada anualmente, con base en la información actualizada del Registro Nacional de Emprendimiento e Innovación y contendrá las estrategias, acciones y metas de emprendimiento e innovación destinadas a cumplir los objetivos planteados en la presente Ley.

Cada miembro del CNEI propondrá las políticas, acciones y medidas consideradas en su sector, a fin de mantener la mejora continua de los indicadores de emprendimiento e innovación.

CAPÍTULO III

FOMENTO AL EMPRENDEDOR Y CREACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS

Art. 11.- Registro Nacional de Emprendimiento.- El Servicio de Rentas Internas creará el Registro Nacional de Emprendimiento -RNE-, con la finalidad de contar un registro nacional de emprendedores, quien será responsable de su actualización. Los parámetros y características de dicho registro se establecerán en el reglamento de esta Ley. Los proyectos que consten dentro de este registro se sujetarán al Título III del Libro IV del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimiento, Creatividad e Innovación.

La constancia de Registro de emprendimiento será incluido en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y en Régimen Impositivo Simplificado (RISE).

Toda persona natural o jurídica que conste en el RNE, con antigüedad menor a cinco años a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, que tengan menos de 49 trabajadores y activos menores a 100.000 USD, podrá beneficiarse de los incentivos previstos en esta Ley.

ASAMBLEA NACIONAL

En el caso de que una persona natural o jurídica que conste en el RNE supere la cantidad de trabajadores y/o de activos y desee acogerse a los beneficios de esta Ley, el CNEI podrá autorizarlo, de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 12.- Infraestructura para centros de emprendimientos.- El ente rector de la gestión inmobiliaria del sector público brindará apoyo y facilitará instalaciones, infraestructuras o establecimientos a su cargo, mediante la suscripción de convenios, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados e instituciones del gobierno central, para ser utilizados como centros de incubación gratuita para emprendedores, con finalidad de acompañar el desarrollo de emprendimientos.

De igual forma, el ente rector de la gestión inmobiliaria del sector público podrá facilitar instalaciones, infraestructuras o establecimientos a su cargo, mediante el arrendamiento a precio preferencial para ser utilizados como centros de apoyo, desarrollo y/o aceleradoras de emprendimientos de carácter público y/o privado.

Artículo 13. Guía nacional de emprendimiento.- La Secretaría Técnica del CNEI generará una guía nacional para emprendedores que provea al menos de los siguientes datos: macro económicos, legales, tributarios, sectoriales, laborales, societarios y financieros del ecosistema emprendedor, además de un directorio de las oficinas comerciales del Ecuador en el mundo, con información de cómo exportar productos y servicios.

La Secretaría Técnica actualizará semestralmente la Guía Nacional de Emprendimiento y podrá incluir la información complementaria que crea necesaria, en coordinación con las demás entidades del Estado.

Artículo 14. Promoción comercial de emprendimientos a nivel internacional.- El ente rector de Comercio Exterior realizará la promoción comercial de productos y servicios de emprendedores que se encuentren en el RNE, a través de sus oficinas comerciales del Ecuador en el exterior.

Además presentará al CNEI una estrategia anual en la que se especificarán los objetivos, metas, proyectos, programas y actividades a desarrollar para el apoyo a emprendedores en el exterior, e igualmente presentará un informe semestral para evaluar el avance de la estrategia de promoción comercial internacional.

ASAMBLEA NACIONAL

CAPÍTULO IV

FOMENTO A LA CULTURA Y EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

Artículo 15. Objetivos específicos de la formación para el emprendimiento.- La formación teórica y práctica para el emprendimiento deberá cumplir con los siguientes objetivos:

- a) Mejorar las capacidades, habilidades y destrezas que permitan emprender con éxito iniciativas productivas;
- b) Promover el acercamiento de las instituciones educativas al sector productivo; y,
- c) Formar en la cultura de cooperación, ahorro e inversión.
- d) Fortalecer actitudes, aptitudes, la capacidad de emprender y adaptarse a las nuevas tendencias, tecnologías y al avance de la ciencia.

Artículo 16. De la formación en habilidades técnicas y blandas.- El Ministerio de Educación y la SENECYT, o quien haga sus veces, vigilarán que en los niveles de educación secundaria y de tercer nivel, se establezcan mallas curriculares que incluyan contenidos y criterios de evaluación de la formación, orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor e innovador, desarrollo de competencias para el emprendimiento basadas en el crecimiento personal del estudiante, la responsabilidad ambiental y social, la ética empresarial, autoconfianza, toma de decisiones, toma de riesgos calculados, creación de valor, liderazgo, creatividad, resolución de conflictos y demás necesarias para formar el “ser” y el “saber hacer” del emprendedor.

El CNEI, en coordinación con el Ministerio de Educación y la SENECYT, emitirá resoluciones con recomendaciones sobre los conocimientos técnicos y las competencias que se deberán incluir en las mallas curriculares o los programas formativos.

Artículo 17. Opción de trabajo de titulación.- Las Universidades, Escuelas Politécnicas Nacionales e Institutos Técnicos de Educación Superior podrán establecer, sin perjuicio de su régimen de autonomía, como alternativa a los trabajos de titulación y dependiendo de la carrera que se opte, la alternativa de desarrollo de planes de negocios o proyectos de emprendimiento, donde se promoverá la formación, capacitación e intercambio de experiencias con el cuerpo docente y empresarios invitados, de conformidad con los principios y parámetros establecidos en esta Ley.

Los mejores planes de negocios o proyectos de emprendimiento que se presenten serán enviados a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para que de cumplir con los requisitos y condiciones establecidos para el efecto formen parte y se beneficien del Programa Banco de Ideas.

ASAMBLEA NACIONAL

Artículo 18. Espacios para la difusión y promoción de emprendimientos en los establecimientos de educación.- Los establecimientos de educación, en todos sus niveles, deberán promover espacios para la presentación, difusión y promoción de proyectos de emprendimiento, para que el alumnado participe en actividades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor e innovador y la iniciativa empresarial a partir del desarrollo de aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Artículo 19.- El emprendimiento y la innovación en la enseñanza universitaria.- El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para efectos del acompañamiento, evaluación, acreditación y cualificación de las Universidades, Escuelas Politécnicas Nacionales e Institutos Técnicos de Educación Superior, tomará en cuenta dentro de este proceso el desarrollo del componente de emprendimiento y la innovación.

CAPÍTULO V

FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO Y GARANTÍAS

Artículo 21. Acceso preferencial a fuentes de financiamiento e inversión.- Los proyectos de Emprendimiento Innovador, de conformidad al artículo 76 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, tendrán acceso preferente a los servicios financieros y a los fondos de inversión públicos.

Artículo 22. Capital semilla.- En el caso que el inversor sea el Estado ecuatoriano se procederá de conformidad con el artículo 620 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

En el caso que el inversor provenga del sector privado se deberá tomar en cuenta que el capital semilla podrá estar compuesto por recursos no reembolsables y/o compromisos de capital, tales como: notas convertibles o mecanismos similares e inversión de capital por acciones, todos los cuales se otorgan a proyectos de emprendimiento que no hayan superado todavía los veinticuatro (24) meses de vida.

Artículo 23. Capital de riesgo.- En el caso que el inversor sea el Estado ecuatoriano se procederá de conformidad con el artículo 621 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación

En el caso que el inversor provenga del sector privado, se debe considerar que el capital de riesgo está compuesto por recursos que mayoritariamente son inversiones de capital, por lo general aplica para emprendimientos que se encuentren en la etapa de posicionamiento en el mercado o de expansión de sus unidades productivas, y que no hayan superado los cinco años de vida del proyecto.

ASAMBLEA NACIONAL

El capital de riesgo no constituye endeudamiento bancario tradicional. La rentabilidad y el reembolso de los recursos aportados por el inversor dependen directamente de la rentabilidad y éxito empresarial del proyecto.

Artículo 24. Inversión ángel.- Se considera inversión ángel a la inversión realizada por un inversor individual que aporta capital y/o conocimientos técnicos a emprendedores que quieran poner en marcha un proyecto empresarial (capital semilla), empresas que se encuentran en el inicio de su actividad (capital de inicio) o empresas que deben afrontar una etapa de crecimiento y/o internacionalización, a cambio de deuda convertible o capital de propiedad. Este tipo de inversión se podrá realizar en todas las etapas de los proyectos de emprendimiento.

Para la inversión ángel, sea cual sea la inyección de capital, la inversión realizada no podrá superar el 49% del capital societario a favor del inversionista y el control de la sociedad debe mantenerse en manos del emprendedor fundador.

El emprendedor fundador es el único facultado para resolver sobre la administración y/o propiedad del emprendimiento.

Artículo 25. Activos intangibles como garantía.- Los emprendedores podrán colocar activos intangibles en el sistema financiero nacional, como garantía para las operaciones de crédito de emprendimientos. Estas garantías estarán respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías administrado por la Corporación Financiera Nacional B.P., para lo cual la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá los parámetros y condiciones requeridos.

Artículo 26. Calificación y registro de los activos intangibles.- Para el adecuado uso de los activos intangibles, éstos deberán estar debidamente registrados y valorados por entidades de derecho público o privado, previamente habilitadas para hacerlo por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, entidad que creará el marco normativo para calificar a los operadores que deseen registrarse como entidades de valoración de activos intangibles. No se podrá usar activos intangibles para respaldar operaciones de garantía bancaria donde el Estado sea el principal cliente.

Las entidades a cargo de regular la valoración de activos intangibles son:

1. La Superintendencia de Bancos, cuando se relacione a acceso a crédito en el sector financiero privado;
2. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cuando se relacione a acceso a crédito en el sector financiero popular y solidario; y,

ASAMBLEA NACIONAL

3. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, cuando sea respecto a incremento de capital accionario y mercado de valores.

En el Reglamento de esta Ley se establecerán los procesos a seguir para la calificación de expertos habilitados en la valoración de activos intangibles.

CAPÍTULO VI FONDOS COLABORATIVOS O CROWDFUNDING

Artículo 27. Plataformas de fondos colaborativos o “crowdfunding”.- Las plataformas de fondos colaborativos o “crowdfunding” conectan promotores públicos, privados o de la economía popular y solidaria, que requieren capital para un determinado proyecto, con o sin ánimo de lucro, con otras personas, denominadas inversores, interesadas en aportar sus recursos para la consecución de dichos proyectos, bajo determinadas condiciones, que serán establecidas en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 28. Registro y control de las plataformas de fondos colaborativos.- El procedimiento de registro de las plataformas de fondos colaborativos se sujetará a la resolución que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para tal efecto.

El control societario de estas compañías estará a cargo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El Registro de las plataformas de fondos colaborativos será público y sus operaciones serán controladas por la Superintendencia de Bancos, de acuerdo con las normas que se expidan para el efecto y requerirán de autorización previa para su funcionamiento por parte de dicha entidad.

Artículo 29. Clasificación de plataformas de fondos colaborativos.- Las plataformas de fondos colaborativos se clasifican en las siguientes categorías:

1. **Donación:** Categoría en la que se contribuye a proyectos típicamente asociados, entre otros, a los ámbitos de la cultura, el deporte, el medio ambiente, los servicios públicos o a la consecución de objetivos de carácter social o humanitario, donde el contribuyente no es inversor, consumidor o usuario.
2. **Recompensa:** Categoría en la que se contribuye a proyectos, con o sin fines de lucro, obteniendo un producto o servicio como retribución a su contribución.
3. **Pre compra:** Categoría en la que se otorga un anticipo para la producción de un bien o gestión de un servicio que será entregado o ejecutado una vez cumplidas las

ASAMBLEA NACIONAL

condiciones publicadas por el promotor.

4. **Inversión en derechos:** Categoría en la que se aporta capital a un proyecto determinado a riesgo del aportante a cambio de ser propietario de una cuota del mismo en función del monto de su aporte, al igual que de los beneficios o pérdidas que el proyecto genere. También se podrá aportar en acciones, siempre y cuando la persona jurídica haya adoptado la decisión de capitalizar previamente a la búsqueda de contribuyentes a cambio de acciones y se trate como una oferta pública de acciones. En este caso, se recibirá los títulos de acciones correspondientes a su capital y pasará a ser accionista de la compañía dueña del proyecto.

Esta clasificación no es exclusiva ni excluyente para la actividad de los participantes de la plataforma, sin embargo cualquier propuesta de crowdfunding deberá asimilarse a los mecanismos de aportación antes descritos y estar enmarcados en el cumplimiento de los requisitos legales.

Artículo 30. Requisitos de las plataformas de fondos colaborativos.- Para desarrollar actividades a través de plataformas de fondos colaborativos, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a) Las plataformas creadas en Ecuador serán a través de sociedades mercantiles legalmente constituidas;
- b) Para la utilización de plataformas internacionales se deberá utilizar plataformas reguladas y acreditadas en el Ecuador;
- c) Contemplar dentro de su objeto social la actuación como intermediario, mediante plataformas de internet, de personas que se denominan promotores, que requieren capital para un determinado proyecto, con o sin ánimo de lucro, con otras personas, denominadas inversores, interesadas en aportar sus recursos para la consecución de dichos proyectos bajo determinadas condiciones, a través de distintas categorías;
- d) Tener una dirección URL de la página web de la plataforma de fondos colaborativos y la dirección de correo electrónico institucional para notificaciones electrónicas; y,
- e) Contar con términos y condiciones de uso de la plataforma de fondos colaborativos que deberán ser publicados en la página web.

Artículo 31. Servicios de las plataformas de fondos colaborativos.- Son servicios de las plataformas de fondos colaborativos los siguientes:

1. Recibir, clasificar y publicitar proyectos de fondos colaborativos.
2. Crear, desarrollar y utilizar canales para facilitar la entrega de información de los proyectos de fondos colaborativos a los inversores.
3. Proveer funciones de búsqueda o categorización de la información exclusivamente en base a criterios de clasificación de objetivos.

ASAMBLEA NACIONAL

Las plataformas de fondos colaborativos podrán realizar actividades afines y complementarias a su objeto social.

Artículo 32. Comisiones de las plataformas de fondos colaborativos.- Las plataformas de fondos colaborativos podrán cobrar comisiones por sus servicios que serán fijadas por la Superintendencia de Bancos, las cuales deberán ser públicas y estar actualizadas permanentemente dentro de los términos y condiciones de la plataforma. Los valores por comisiones deberán ser presentados de manera clara e inequívoca, de forma que el promotor pueda conocer el costo de uso y servicios de la plataforma de fondos colaborativos. Las sociedades mercantiles de fondos colaborativos no podrán utilizar los fondos que recaudan a nombre de terceros para realizar gastos o inversiones propias.

Artículo 33. Obligaciones de las plataformas de fondos colaborativos.- Son obligaciones de las plataformas de fondos colaborativos, las siguientes:

- a) Establecer en los términos y condiciones de cada proyecto los requisitos mínimos que deben cumplir los aportantes y los beneficiarios;
- b) Garantizar la equidad de difusión de todos los proyectos de la plataforma;
- c) Informar, dentro de los términos y condiciones de la plataforma de fondos colaborativos, el procedimiento de transferencia de fondos y la identidad de las partes intervinientes;
- d) Indicar al inversor los datos y el mecanismo necesario para realizar la transferencia de los fondos correspondientes al proyecto;
- e) Ordenar a la entidad financiera la liberación de los fondos transferidos a favor del promotor;
- f) Ordenar a la entidad financiera la reversión de los fondos recaudados a favor del inversor, en caso de no cumplirse las condiciones del proyecto y/o del fenecimiento del plazo máximo de publicación;
- g) Publicar la información de contacto de los promotores en cada proyecto;
- h) Cumplir con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos;
- i) Entregar al promotor la información de contacto de los inversores que participen en la financiación de su proyecto; y,
- j) Contar con aplicaciones o plataformas que garanticen su funcionamiento permanente y soporten la funcionalidad de cualquier posible cambio tecnológico.

Será responsabilidad absoluta del receptor de los fondos la utilización correcta de los mismos y el cumplimiento de las condiciones del proyecto.

Artículo 34. Prohibiciones de las plataformas de fondos colaborativos.- Se prohíbe a las plataformas de fondos colaborativos:

ASAMBLEA NACIONAL

1. Administrar directamente los recursos de los proyectos financiados.
2. Asegurar el cumplimiento de las expectativas del proyecto.
3. Otorgar préstamos, créditos o cualquier otro tipo de financiamiento a los inversores o promotores.
4. Recibir los fondos del inversor sin la aceptación de términos y condiciones de uso de la plataforma de fondos colaborativos.
5. Ser utilizada para todo tipo de sorteos y/o juegos de azar.

Las personas naturales no podrán brindar el servicio de Plataforma de Fondos Colaborativos, de manera independiente, aunque ejerzan el comercio de manera habitual.

Artículo 35. Clasificación de proyectos en las plataformas de fondos colaborativos.- Las plataformas de fondos colaborativos deberán adoptar un procedimiento que permita clasificar los proyectos a partir de un análisis objetivo de la información suministrada por los promotores.

El procedimiento deberá considerar información relevante del proyecto relacionada con su sector, finalidad y/o localización, entre otros, empleando criterios de análisis homogéneos y no discriminatorios.

La clasificación de los proyectos en ningún caso implica la calificación de los riesgos asociados, ni la emisión de una opinión o el aseguramiento de obtención de rentabilidades para los inversores.

Artículo 36. Recaudación de recursos en las plataformas de fondos colaborativos.- Toda recaudación de recursos para los proyectos de fondos colaborativos se hará mediante instituciones del sistema financiero.

Un proyecto podrá financiarse, al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones, en más de una plataforma nacional de fondos colaborativos, aspectos que serán regulados en el reglamento de esta Ley.

Artículo 37. Plazo máximo de publicación en las plataformas de fondos colaborativos.- Las plataformas de fondos colaborativos se asegurarán de que para cada proyecto se establezca un plazo máximo para la consecución de los recursos, que en ningún caso podrá superar doce (12) meses contados a partir de la fecha de publicación del proyecto.

En caso de cumplirse el plazo la plataforma de fondos colaborativos deberá suspender la publicación del proyecto y notificar a los inversores y promotores relacionados con el proyecto.

ASAMBLEA NACIONAL

Artículo 38. De la transferencia de fondos colaborativos.- En caso de que se verifique el cumplimiento de las condiciones del proyecto, las plataformas de fondos colaborativos deberán ordenar a la entidad financiera la liberación de los fondos transferidos, a favor del promotor, máximo en cinco días hábiles a partir del citado cumplimiento.

Salvo estipulación en contrario señalada en los términos y condiciones, en caso de que se verifique que no se cumplieron las condiciones del proyecto y/o el vencimiento del plazo máximo de publicación, las plataformas de fondos colaborativos deberán ordenar a la entidad financiera realice la reversión de los fondos recaudados, a favor del inversor, máximo en cinco días hábiles a partir del incumplimiento o extinción del plazo.

TÍTULO VII

CONDICIONES LABORALES

Artículo 39. Régimen especial de contratación de personal para emprendimientos.- Con el objetivo de incentivar la generación de empleo y la formalización del trabajo en los procesos de emprendimiento, se dispone al ente rector en materia de trabajo desarrollar la modalidad o modalidades contractuales a implementarse en el trabajo emprendedor, en donde se incluirá la jornada parcial, así como el tiempo de duración de los contratos, pago de beneficios de ley, remuneración y su forma de cálculo, y demás requisitos y condiciones que deberá cumplir el trabajador/a.

El ente rector en materia de trabajo establecerá la respectiva comisión sectorial para la fijación del sueldo o salario básico unificado de los trabajadores de cada sector del emprendimiento, quienes tendrán derecho a la protección integral del Código del Trabajo.

Artículo 40. Afiliación a la seguridad social.- Una vez que se suscriba el contrato de trabajo emprendedor, el empleador deberá afiliar al trabajador en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tendrá derecho a sus beneficios desde el primer día de inicio de la relación laboral y su afiliación.

En caso de terminar la relación laboral antes de cumplir el año, el empleador deberá cancelar el monto equivalente adeudado hasta la fecha efectiva de terminación de la relación laboral, conforme lo determina el Código del Trabajo.

DISPOSICIONES REFORMATARIAS

PRIMERA.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 1 de la Ley de Compañías, por el siguiente:

ASAMBLEA NACIONAL

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles, participar de sus utilidades y de otros beneficios sociales, colectivos y/o ambientales.

SEGUNDA.- Sustituir el artículo 2 de la Ley de Compañías, por el siguiente:

Art. 2.- Hay seis especies de compañías de comercio, a saber:

La compañía en nombre colectivo;

La compañía en comandita simple y dividida por acciones;

La compañía de responsabilidad limitada;

La compañía anónima,

La sociedad por acciones simplificada; y,

La compañía de economía mixta.

Estas seis especies de compañías constituyen personas jurídicas.

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación.

TERCERA.- Sustitúyase el artículo 92 de la Ley de Compañías, por el siguiente:

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, tales como: "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar.

Si se trata de una compañía que ha adoptado la categoría de sociedad de beneficio e interés colectivo, podrá agregar a su denominación la expresión "Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo", o las siglas B.I.C.

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una compañía de responsabilidad limitada.

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445 de la Ley de Compañías. La multa tendrá el destino indicado en tal

ASAMBLEA NACIONAL

precepto legal. Impuesta la sanción, la Superintendencia de Compañías y Valores notificará al Ministerio de Finanzas para la recaudación correspondiente.

En esta compañía el capital estará representado por participaciones que podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. 113 de la Ley de Compañías.

CUARTA.- Sustitúyase el artículo 144 de la Ley de Compañías, por el siguiente:

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no.

La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se determina la clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar.

Si se trata de una compañía que ha adoptado la categoría de sociedad de beneficio e interés colectivo, podrá agregar a su denominación la expresión "Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo", o las siglas B.I.C.

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran que se trata de una compañía anónima.

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, la Superintendencia de Compañías y Valores notificará al Ministerio de Salud para la recaudación correspondiente.

QUINTA.- Sustitúyase el artículo 303 de la Ley de Compañías, por el siguiente:

Art. 303.- La compañía en comandita por acciones existirá bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más socios solidariamente responsables, seguidos de las palabras "compañía en comandita" o su abreviatura.

Si se trata de una compañía que ha adoptado la categoría de sociedad de beneficio e interés colectivo, podrá agregar a su denominación la expresión "Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo", o las siglas B.I.C."

ASAMBLEA NACIONAL

SEXTA.- Sustitúyase el artículo 431 de la Ley de Compañías, por el siguiente:

Artículo 431.- La Superintendencia de Compañías y Valores tiene personalidad jurídica y su primera autoridad y representante legal es el Superintendente de Compañías y Valores.

La Superintendencia de Compañías y Valores ejercerá la vigilancia y control:

- a) De las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, en general;
- b) De las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su especie;
- c) De las compañías de responsabilidad limitada;
- d) De las sociedades por acciones simplificada; y,
- e) De las bolsas de valores y demás entes, en los términos de la Ley de Mercado de Valores.

SÉPTIMA.- A continuación de la sección VIII de la Ley de Compañías inclúyase la siguiente sección innumerada de las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S).

Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S)

1. Disposiciones Generales.-

Art (...) Definición y naturaleza.- La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre mercantil, independientemente de sus actividades operacionales.

Art (...) Limitación de responsabilidad.- La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables limitadamente por las obligaciones de la sociedad por acciones simplificada hasta por el monto de sus respectivos aportes. Salvo que, en sede judicial, se hubiere desestimado la personalidad jurídica de la sociedad por acciones simplificada, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en las que incurra la sociedad.

El o los accionistas podrán renunciar de manera expresa al principio de la responsabilidad limitada en este tipo de compañías, con el fin de abrir su patrimonio personal y asegurar, con sus propios bienes, cualquier operación de la sociedad por acciones simplificada. Esta renuncia, que constará en el estatuto de la compañía de manera originaria o a través de una reforma al mismo, requerirá de una resolución de la asamblea y de una aceptación manifiesta del accionista que renuncia a la limitación de su responsabilidad.

ASAMBLEA NACIONAL

Art (...) Personalidad jurídica.- La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas.

Art (...) Imposibilidad de negociar valores en el mercado público.- Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán inscribirse en el Catastro Público de Mercado de Valores ni ser negociadas en bolsa

Art (...) Prohibiciones.- Las sociedades por acciones simplificadas no podrán realizar actividades relacionadas con operaciones financieras, de mercado de valores, seguros, transporte terrestre, u otras actividades que tengan un tratamiento especial, de acuerdo con la Ley.

2. Constitución y prueba de la sociedad.-

Art (...) Constitución de la sociedad por acciones simplificada.- La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado que se inscribirá en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, momento desde el cual adquiere vida jurídica. El documento constitutivo deberá contener los requisitos mínimos para la constitución de una sociedad por acciones simplificada, expresados en esta Ley para este tipo de compañías.

Los Intendentes de Compañías, en sus respectivas jurisdicciones, tendrán la competencia para el registro y control de este tipo de sociedades.

De acuerdo con la reglamentación expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la sociedad por acciones simplificadas también podrá constituirse por vía electrónica.

Si se trata de una compañía que ha adoptado la categoría de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, podrá agregar a su denominación la expresión "Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo", o las siglas B.I.C."

Art (...) Presunción de veracidad de la información proporcionada por los fundadores.- La veracidad y autenticidad de la información proporcionada por el o los accionistas durante el proceso de constitución de una sociedad por acciones simplificada, es de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros presumirá que las declaraciones, documentos y actuaciones de las personas efectuadas en virtud del trámite administrativo de constitución de este tipo societario son verdaderas, bajo aviso a los comparecientes que, en caso de verificarse lo contrario durante las labores de control previo de legalidad, el trámite y resultado final de la gestión podrán ser negados y

ASAMBLEA NACIONAL

archivados, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieren concurrir.

Art. (...) Contenido del documento constitutivo.- El documento de constitución, sin perjuicio de las cláusulas que los accionistas resuelvan incluir de acuerdo con la Ley, expresará, cuando menos, lo siguiente:

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato o acto unilateral;
2. Nombre, nacionalidad, acreditación de identidad, correo electrónico y domicilio de los accionistas;
3. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada” o de las letras S.A.S.;
4. El domicilio principal de la sociedad, el mismo que será cantonal;
5. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido;
6. Una enunciación clara y completa de las actividades previstas en su objeto social, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad mercantil o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita;
7. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre completo y nacionalidad de los suscriptores del capital;
8. La indicación, de acuerdo con la libre estipulación de las partes, de lo que cada accionista suscribe y paga en dinero o en otros bienes muebles, inmuebles o intangibles, y, en estos últimos casos, el valor atribuido a éstos,
9. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la sociedad, si se hubiese acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tengan la representación legal, así como la designación del primer representante legal, y su subrogante;
10. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la asamblea de accionistas y el modo de convocarla y constituir la;
11. Las normas de reparto de utilidades y el soporte de las pérdidas.

En caso de que una sociedad extranjera fuere fundadora de una sociedad por acciones simplificada, al documento de fundación deberá agregarse una certificación que acredite la existencia legal de dicha sociedad en su país de origen.

Para el caso de personas jurídicas que sean accionistas de esta clase de sociedades, deberán reportar, según lo establezca la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la información necesaria para poder determinar e identificar a la correspondiente persona natural socio o accionista.

ASAMBLEA NACIONAL

Art. (...) Control previo de legalidad al documento constitutivo.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros efectuará un control de legalidad de las estipulaciones del documento constitutivo, de acuerdo con la Ley. De cumplirse con todos los requisitos previstos en el artículo precedente y en esta Ley, además de los reglamentos que para el efecto expida la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el documento constitutivo y los nombramientos se inscribirán en el Registro de Sociedades a cargo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, momento desde el cual la sociedad por acciones simplificada tiene existencia jurídica.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros negará la inscripción del documento constitutivo cuando aquel omitiere alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior o en la Ley. Esta negativa se podrá mantener hasta que las observaciones formuladas sean subsanadas. Si la negativa de inscripción registral se da a través de resolución administrativa, podrá ser objeto de un recurso de apelación ante la misma Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de acuerdo con el Código Orgánico Administrativo.

La inscripción en el Registro de Sociedades del documento de constitución de una sociedad por acciones simplificada, goza de las presunciones de estabilidad, exigibilidad y ejecutoriedad. Por lo tanto, una vez efectuada, en debida forma, la inscripción registral del acto constitutivo en el Registro de Sociedades, la misma no podrá revocarse en sede administrativa, cancelarse, dejarse sin efecto o anularse, salvo disposición expresa emitida por Juez competente en tales sentidos o, como la compañía es una persona jurídica válidamente constituida, podrá disolverse, liquidarse y cancelarse de acuerdo con la Ley.

Art (...) Principio de existencia de la sociedad por acciones simplificada.- El principio de existencia de las sociedades por acciones simplificadas es la fecha de inscripción del acto constitutivo en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Art. (...) Actos societarios ulteriores.- Todos los actos societarios ulteriores de las sociedades por acciones simplificadas se sujetarán a las solemnidades establecidas por Ley para su constitución.

Art. (...) Actos societarios que requieren de resolución aprobatoria previa.- Solamente los actos societarios enumerados en el artículo final de este capítulo requerirán de una resolución aprobatoria previa a su inscripción en el Registro de Sociedades.

Art. (...) Sociedad irregular.- La sociedad por acciones simplificada será considerada irregular cuando el acto constitutivo se hubiere celebrado o ejecutado de conformidad con este capítulo, pero no se hubiere inscrito en el Registro de Sociedades de la

ASAMBLEA NACIONAL

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y no se considerará como una persona jurídica.

El que contratare por una sociedad por acciones simplificada que no hubiere sido legalmente constituida, no puede sustraerse, por esta razón, al cumplimiento de sus obligaciones. Para tales efectos, quienes ejecutaren, celebraren u ordenaren la celebración de actos o contratos a nombre de una sociedad por acciones simplificada no constituida legalmente, serán solidaria e ilimitadamente responsables frente a terceros.

Art. (...) Prueba de existencia de la sociedad.- La existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en donde conste que los registros de la sociedad no han sido cancelados

3. Reglas sobre el capital y las acciones.-

Art. (...) Suscripción y pago del capital de las sociedades por acciones simplificadas.- La suscripción y el pago del capital podrán hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos a los requeridos para las sociedades anónimas, de acuerdo con lo establecido en el estatuto de la sociedad por acciones simplificada. No obstante, en ningún caso el plazo para el pago de las acciones excederá de 24 meses. En el acto o contrato de constitución podrán convenirse libremente las reglas que fueren pertinentes, mientras no se opongan a esta Ley.

Art. (...) Aportes en numerario.- En el caso de que las aportaciones sean en numerario, los accionistas fundadores depositarán el capital por pagar de la sociedad en la cuenta que la compañía abra en una institución bancaria en un plazo máximo de 24 meses, en observancia de las reglas que hubieren fijado libremente de acuerdo con el artículo precedente

Art. (...) Valor nominal y capital mínimo.- Las acciones de una sociedad por acciones simplificada tendrán el valor nominal de un dólar o múltiplos de un dólar de los Estados Unidos de América. La sociedad por acciones simplificada no tendrá un requerimiento de capital mínimo.

Art. (...) Aporte de bienes- Las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio. El riesgo de la cosa será de cargo de la sociedad por acciones simplificada desde la fecha en que se le haga la entrega respectiva. Los aportes en especie deberán integrarse en un 100% al momento de la suscripción.

En los casos en que la aportación no fuere en numerario, en el acto constitutivo se hará constar el bien en que consista tal aportación, su valor y la transferencia de dominio que del

ASAMBLEA NACIONAL

mismo se haga a la sociedad por acciones simplificada, así como las acciones a cambio de las especies aportadas.

Las especies aportadas serán valuadas por los fundadores o por peritos calificados por ellos designados. Los fundadores y los peritos responderán solidariamente frente a la sociedad y con relación a terceros por el valor asignado a las especies aportadas.

Art. (...) Exención tributaria de los aportes efectuados a título de sociedad.- Los aportes de bienes efectuados a una sociedad por acciones simplificada no causarán ningún impuesto, contribución, tasa ni carga tributaria alguna, bien sea fiscal, provincial, municipal o especial. La misma disposición será aplicable sobre cualquier acto cuya ejecución fuere necesaria para la consecución de tal fin.

Art. (...) Requerimiento de escritura pública.- Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.

Si para la transferencia de los bienes fuere necesaria la inscripción en el Registro de la Propiedad, ésta se hará posteriormente a la inscripción del acto constitutivo en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Similar disposición deberá ser observada frente a cualquier bien cuya tradición esté sujeta a una inscripción registral.

Art. (...) Clases de acciones.- Las acciones serán nominativas.

Podrán crearse diversas clases y series de acciones. Respecto a su clase, las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según lo establezca el estatuto.

Las acciones ordinarias confieren todos los derechos fundamentales que en la ley reconoce a los accionistas. Las acciones preferidas son las que otorgan a su titular preferencias o ventajas en la distribución y pago de utilidades y en el reembolso del haber social en caso de liquidación, pero no tendrán, en ningún caso, derecho a voto.

El monto de las acciones preferidas no podrá exceder del cincuenta por ciento del capital suscrito de la sociedad por acciones simplificada.

Salvo estipulación en contrario del estatuto social, las acciones serán ordinarias.

Art (...) Aumento de capital.- Las sociedades por acciones simplificadas podrán aumentar su capital social, a través de aportes en numerario o especie, sean estos bienes muebles,

ASAMBLEA NACIONAL

inmuebles o intangibles. A su vez, el aumento de capital podrá ser efectuado bajo la figura de la compensación de créditos.

La sociedad por acciones simplificada también podrá, previo a las deducciones de Ley, aumentar su capital social a través de la capitalización de reservas o de utilidades que, habiendo sido declaradas, no hubieren sido distribuidas entre sus accionistas. Si el aumento de capital se hiciere con aplicación a cuentas patrimoniales, los valores destinados a tal objeto deben haber sido objeto de tributación previa por parte de la sociedad por acciones simplificada.

La suscripción y el pago del capital podrán hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos a los requeridos para las sociedades anónimas, de acuerdo con lo establecido en el estatuto de la sociedad por acciones simplificada. No obstante, en ningún caso el plazo para el pago en numerario de las acciones producto del aumento de capital excederá de 24 meses. En el acto societario de aumento de capital, podrán convenirse libremente las reglas que fueren pertinentes, mientras no se opongan a esta Ley.

Art (...) Derecho de preferencia.- Cuando el aumento de capital se realizare en numerario o por compensación de créditos, los accionistas de las sociedades por acciones simplificadas tendrán derecho de suscripción preferente. No obstante, aquel derecho, a diferencia de la regulación de las sociedades anónimas, es relativo. En consecuencia, si la sociedad acordare un aumento de capital, los accionistas tendrán derecho de preferencia en ese aumento, en proporción a sus acciones, si es que en el contrato constitutivo no se conviniere lo contrario. De no contemplarse disposición alguna al respecto en el contrato constitutivo, los accionistas gozarán del derecho de suscripción preferente, salvo resolución en contrario adoptada por decisión unánime del capital concurrente a la reunión que establezca las bases del aumento de capital.

No existirá derecho de preferencia para el aumento de capital en especie.

Art (...) Derecho de atribución.- Si el aumento de capital se hiciere con aplicación a cuentas patrimoniales de la sociedad por acciones simplificada, los accionistas tendrán derecho a que se les atribuya las acciones en estricta prorrata a su participación en el capital social.

Art. (...) Voto y diversas series de acciones.- Salvo disposición en contrario del estatuto social, cada accionista dispondrá de un voto por cada acción que posea o represente.

El estatuto social podrá contemplar distintas series de acciones. De haberse estipulado la existencia de diversas series de acciones, en el estatuto se expresarán los derechos de votación que le correspondan a cada una de las mismas, con indicación expresa sobre la atribución de voto singular o múltiple, si a ello hubiere lugar.

ASAMBLEA NACIONAL

Art. (...) Transferencia de acciones.- Las acciones en que se divide el capital de la sociedad por acciones simplificada podrán transferirse por acto entre vivos mediante nota de cesión. A pesar de su validez *inter partes*, la transferencia de acciones surtirá efectos, frente a la compañía y terceros, a partir de su inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas. El procedimiento de transferencia y notificación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros estará a lo dispuesto para las acciones en las compañías anónimas establecidas en la Ley de Compañías.

Art. (...) Restricciones a la negociación de acciones.- En el estatuto podrá estipularse la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus series, siempre que la vigencia de la restricción no exceda del plazo de diez (10) años, contados a partir de la correspondiente emisión. Este plazo sólo podrá ser prorrogado por periodos adicionales no mayores de diez (10) años, por voluntad unánime de la totalidad de los accionistas.

Al dorso de los títulos deberá hacerse referencia expresa sobre la restricción a que alude este artículo.

Art. (...) Autorización para la transferencia de acciones.- El estatuto podrá someter toda negociación de acciones o de alguna clase de ellas a la autorización previa de la asamblea o a algún tipo de pacto o condición previo. De no haberse pactado dicha estipulación de forma expresa, se entenderá que las acciones son libremente transferibles.

Art. (...) Violación de las restricciones a la negociación.- Toda negociación o transferencia de acciones efectuada en contravención a lo previsto en el artículo anterior, adolecerá de nulidad.

Art. (...) Cambio de control en la sociedad accionista.- En el estatuto social podrá establecerse la obligación, a cargo de las sociedades accionistas, en el sentido de informarle al representante legal de la respectiva sociedad por acciones simplificada acerca de cualquier operación que implique un cambio de control respecto de aquellas.

En estos casos de cambio de control, la asamblea estará facultada para excluir a las sociedades accionistas cuya situación de control fue modificada, mediante decisión adoptada por la asamblea.

El incumplimiento del deber de información a que alude el presente artículo por parte de cualquiera de las sociedades accionistas dará lugar a la posibilidad de su exclusión, según lo previsto en el presente capítulo, al pago del valor de la acción y la correspondiente disminución de capital, si corresponde.

ASAMBLEA NACIONAL

En los casos a que se refiere este artículo, las determinaciones relativas a la exclusión requerirán aprobación de la asamblea de accionistas, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones con derecho a voto, presentes en la respectiva reunión, excluido el voto del accionista que fuere objeto de estas medidas.

4. Organización de la Sociedad.-

Art. (...) Organización de la sociedad.- En el estatuto de la sociedad por acciones simplificada se determinará libremente la estructura orgánica de la sociedad y demás normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en la Ley de Compañías, respecto a las juntas generales de las sociedades anónimas, serán ejercidas por la asamblea o el accionista único y las de administración estarán a cargo del representante legal.

Durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos sociales en cuanto sean compatibles, incluidas las del representante legal, salvo que se hubiere extendido un nombramiento, para tales efectos, a un tercero.

Art. (...) Reuniones de los órganos sociales.- La asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal de la sociedad por acciones simplificada o fuera de él, aunque no esté presente un quórum universal, con concurrencia del o de los accionistas, en persona o por representante, siempre y cuando se cumplan los requisitos de quórum y convocatoria previstos en el presente capítulo.

Art. (...) Convocatoria a la asamblea de accionistas.- La asamblea será convocada por el representante legal de la sociedad por acciones simplificada, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista, o por los medios previstos en el estatuto social, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles, por lo menos, al fijado para la reunión. Si el estatuto contempla un plazo mayor, se estará a lo dispuesto en él, de acuerdo con el artículo 1561 del Código Civil.

En el aviso de convocatoria se insertará, al menos, el lugar de la reunión, día, hora y el orden del día correspondiente a la asamblea.

Las convocatorias también serán enviadas por correo electrónico dirigido a cada uno de los accionistas. Los accionistas tienen la obligación de comunicar al representante legal la dirección de correo electrónico en el que recibirán las convocatorias, cuando corresponda. Es responsabilidad del representante legal de la sociedad mantener el registro de dichos correos. En el caso de que el representante legal no cuente con los correos electrónicos de

ASAMBLEA NACIONAL

todos los accionistas, podrá hacer una publicación por la prensa con cinco (5) días hábiles, por lo menos, al fijado para la reunión.

Art. (...) Derecho de inspección de los accionistas.- Cuando se tenga que aprobar estados financieros de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser ejercido durante los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, a menos que en el estatuto se convenga un término superior.

Art. (...) Posibilidad de inclusión de fecha de segunda convocatoria.- La primera convocatoria para una reunión de la asamblea de accionistas podrá incluir, igualmente, la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión, por falta de quórum de instalación. La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha anterior a los diez (10) días hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los treinta (30) días hábiles contados desde ese mismo momento.

Art. (...) Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección respecto de la aprobación de estados financieros de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión, por medio del mismo procedimiento indicado.

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.

Art. (...) Quórum de instalación y decisión en la asamblea de accionistas.- Salvo estipulación en contrario que refuerce el quórum de instalación, la asamblea se instalará, en primera convocatoria, con uno o varios accionistas que representen, cuando menos, la mitad del capital social con derecho a voto. En segunda convocatoria, la junta se instalará con los accionistas presentes y que estuvieren habilitados para votar, inclusive con uno solo.

Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen, cuando menos, la mitad más uno de las acciones con derecho a voto, presentes en la respectiva reunión, salvo que en los estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para algunas o todas las decisiones.

En las sociedades con accionista único las determinaciones que le correspondan a la asamblea serán adoptadas por aquél. En estos casos, el accionista dejará constancia de tales determinaciones en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.

ASAMBLEA NACIONAL

Art. (...) Presidente y secretario de las asambleas de accionistas.- A falta de estipulación en contrario del estatuto social o de resolución de la asamblea, el representante legal de la sociedad actuará como presidente de la asamblea de accionistas. El secretario será designado por la asamblea correspondiente

Art. (...) Comparecencia alternativa a la asamblea a través de medios digitales o tecnológicos.- La asamblea de accionistas también podrá instalarse, sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su competencia, a través de la comparecencia de los accionistas mediante videoconferencia o cualquier otro medio digital o tecnológico.

Art. (...) Elaboración de las actas de las asambleas.- Las actas correspondientes a las deliberaciones de las asambleas deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo, dentro de los 30 días siguientes a aquél en que la asamblea se celebró. Las actas serán suscritas por el presidente de la asamblea de accionistas, y por su secretario. La falta de dichas firmas acarreará la nulidad de dicho medio probatorio.

Art. (...) Asambleas universales.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la asamblea de accionistas se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social, y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la asamblea universal. La infracción de este inciso acarreará la nulidad de la resolución adoptada por la asamblea.

Si la asamblea se instalare con la comparecencia de los accionistas mediante un medio digital o tecnológico, todos los accionistas cursarán, obligatoriamente, un correo electrónico dirigido al presidente y al secretario de la asamblea, consintiendo su celebración con el carácter de universal. En tal caso, dichos correos electrónicos deberán ser incorporados al respectivo expediente. La comparecencia de los accionistas, sustentada en sus correos electrónicos confirmatorios, deberá ser especificada en la lista de asistentes y en el acta de la asamblea. Ambos documentos serán suscritos por el presidente de la asamblea de accionistas, y por su secretario. La falta de dichas firmas acarreará la nulidad de los mencionados medios probatorios.

En caso que la asamblea universal se reuniera físicamente, todos los asistentes deberán suscribir el acta, bajo sanción de nulidad de dicho medio probatorio.

En cualquier caso, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.

Art. (...) Acuerdos de accionistas.- Los acuerdos de accionistas sobre la compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas o para aumentar el capital social, las restricciones

ASAMBLEA NACIONAL

para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados por la compañía cuando hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad. Caso contrario, a pesar de su validez *inter partes*, dichos acuerdos devendrán inoponibles para la sociedad por acciones simplificada.

Los acuerdos de accionistas no podrán tener un plazo superior a diez (10) años, prorrogables por voluntad unánime de sus suscriptores por períodos que no superen el mismo espacio de tiempo.

Los accionistas suscriptores del acuerdo deberán indicar, en el momento de depositarlo, la persona que habrá de representarlos para recibir información o para suministrarla cuando ésta fuere solicitada. La compañía podrá requerir por escrito al representante aclaraciones sobre cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo caso la respuesta deberá suministrarse, también por escrito, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes al recibo de la solicitud.

El presidente de la asamblea o del órgano colegiado de deliberación de la compañía no computará el voto proferido en contravención a un acuerdo de accionistas debidamente depositado.

En las condiciones previstas en el acuerdo, los accionistas podrán promover, ante el Juez de lo Civil del domicilio social de la sociedad por acciones simplificada, la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.

Art. (...) Junta directiva.- La sociedad por acciones simplificada no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación legal le corresponderán al representante legal designado por la asamblea.

En caso de pactarse en los estatutos la creación de una junta directiva, ésta podrá integrarse con uno o varios miembros respecto de los cuales podrán establecerse suplencias. Los directores podrán ser designados mediante votación mayoritaria o por cualquier otro método previsto en los estatutos. A falta de previsión estatutaria respecto a los derechos, obligaciones y responsabilidades de los miembros de la junta directiva, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Compañías. Las normas sobre el funcionamiento de la junta directiva deberán ser determinadas en los estatutos.

Art. (...) Representación legal.- La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica designada por la asamblea o por el accionista único en la forma prevista en el estatuto social. A falta de estipulaciones en contrario, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y

ASAMBLA NACIONAL

contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El estatuto social deberá señalar, de manera obligatoria, quien subrogará al representante legal en caso de renuncia, remoción, separación o reemplazo, mientras la asamblea o el accionista único efectúa la designación del nuevo titular.

Designado el representante legal, inscribirá su nombramiento, con la razón de su aceptación, en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro de los treinta días posteriores a su designación. La fecha de la inscripción del nombramiento será la del comienzo de sus funciones.

Art. (...) Control de legalidad de la designación del representante legal.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros efectuará un control formal de legalidad de la designación del representante legal. De cumplirse con todos los requisitos legales y estatutarios, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros inscribirá el correspondiente nombramiento en el Registro de Sociedades; en caso contrario, la negará. La resolución que niegue la inscripción registral del nombramiento, que será emitida por la unidad de Registro de Sociedades, podrá ser objeto de un recurso de apelación ante la misma Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de acuerdo con el Código Orgánico Administrativo.

La inscripción en el Registro de Sociedades del nombramiento del representante legal de una sociedad por acciones simplificada, goza de las presunciones de estabilidad, exigibilidad y ejecutoriedad. Por lo tanto, una vez efectuada en debida forma la inscripción registral del correspondiente nombramiento en el Registro de Sociedades, la misma no podrá revocarse en sede administrativa, cancelarse, dejarse sin efecto o anularse, salvo disposición expresa emitida por Juez competente en tales sentidos.

Art (...) Separación del representante legal.- La separación, remoción o reemplazo del representante legal podrán ser acordadas en cualquier tiempo por la asamblea de accionistas, sin necesidad de invocar causa alguna. En cualquier caso, la misma asamblea deberá designar al correspondiente reemplazo

La separación, remoción o reemplazo del representante legal surte efecto a partir de su anotación, al margen de la inscripción del respectivo nombramiento, por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Cuando la separación, remoción o renuncia surtiere efectos, asumirá el cargo de representante legal quien estuviere llamado a subrogarlo de acuerdo con el estatuto social, mientras la asamblea de accionistas designe al nuevo representante legal.

ASAMBLEA NACIONAL

Art. (...) Renuncia del representante legal: La renuncia del representante legal surte efecto a partir de su anotación, al margen de la inscripción del respectivo nombramiento, por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Para ello, entregará una copia del acta de la asamblea en que aparezca el conocimiento de la dimisión. En caso que el conocimiento de la renuncia no corresponda a la asamblea, se entregará copia del acta de la reunión celebrada para el efecto por el órgano correspondiente.

Cuando, por cualquier motivo, la asamblea de accionistas o el órgano que correspondiere no se instalaren para conocer la renuncia, el representante legal renunciante podrá presentar una copia de la renuncia recibida por cualquier personero administrativo de la sociedad por acciones simplificada.

Cuando la renuncia surtiere efectos, asumirá el cargo de representante legal quien estuviere llamado a subrogarlo de acuerdo con el estatuto social, mientras la asamblea de accionistas designe al nuevo representante legal.

Art (...) Designación de administrador temporal.- Cuando por cualquier motivo la sociedad por acciones simplificada quedare en acefalía, cualquiera de los accionistas enviará una comunicación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para que nombre a un administrador temporal que, de manera provisional, asuma la marcha operacional de la sociedad por acciones simplificada. Dicho administrador encargado no podrá realizar nuevas operaciones y se concretará a la conclusión de las pendientes.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros podrá, de oficio, designar un administrador temporal, cuando constatare que una sociedad por acciones simplificada se encuentra en acefalía.

El administrador temporal, en un plazo improrrogable de diez días a partir de su designación, convocará a la asamblea de accionistas, con el fin de designar al nuevo representante legal. En caso de no efectuarse dicha convocatoria o si el administrador temporal rehusare hacerla, cualquiera de los accionistas podrá recurrir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, solicitando dicha convocatoria.

Art. (...) Responsabilidad del representante legal.- Las reglas relativas a la responsabilidad de administradores contenidas en la Ley de Compañías les serán aplicables tanto al representante legal de la sociedad por acciones simplificada como a su junta directiva y demás órganos de administración, si los hubiere.

Las personas naturales o jurídicas que, sin ser representante legal de una sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, o que asumieren frente a terceros la calidad de administradores, sin

ASAMBLEA NACIONAL

serlo legalmente, incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los representantes legalmente designados.

Art (...) Prohibición del representante legal.- El representante legal de las sociedades por acciones simplificadas, o los miembros de su junta directiva y demás órganos de administración, si los hubiere, no podrán negociar o contratar, por cuenta propia, directa o indirectamente, con la sociedad por acciones simplificada que administran, salvo las excepciones previstas en este artículo.

Se presume de derecho que existe negociación o contratación indirecta del representante legal con la sociedad por acciones simplificada cuando:

- a) La operación se realizare con el cónyuge o cualquier pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad; y,
- b) La operación se realizare con una persona jurídica en la que el representante legal, su cónyuge o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad, tuvieren intereses relevantes en cuanto a inversiones o les correspondieren facultades administrativas decisorias. Para este efecto, se considerarán intereses relevantes los que correspondan al representante legal, a su cónyuge o a sus parientes comprendidos en el grado antes citado, como consecuencia de que cualquiera de ellos sea propietario del diez por ciento o más de las participaciones o acciones en que se divida el capital suscrito de una compañía.

Se exceptúan de la prohibición constante en este artículo, los siguientes actos y contratos:

- a) La contratación de nueva sociedad entre el representante legal, a título individual, y la sociedad por acciones simplificada que éste represente;
- b) Las entregas de dinero hechas por los representantes legales a favor de las sociedades por acciones simplificadas que administren, a título de mutuo sin intereses o de simple depósito;
- c) La suscripción de acciones, en los casos de aumento de capital, sin límite alguno, así como los aportes o compensaciones que para pagar tales acciones se deban efectuar;
- d) La enajenación de acciones a favor de la sociedad por acciones simplificadas;
- e) El comodato en que la sociedad por acciones simplificada fuere la comodataria o cualquier otro acto o contrato gratuito ejecutado o celebrado en beneficio exclusivo de la sociedad por acciones simplificada;

ASAMBLEA NACIONAL

- f) La prestación de servicios profesionales y de servicios personales en relación de dependencia;
- g) La celebración de contratos que sean de la actividad en que la sociedad opere, y siempre que se pacten en las condiciones normales del mercado y para la satisfacción de necesidades del representante legal; y,
- h) Los demás actos o contratos cuya celebración hubiere sido aprobada por la asamblea de accionistas, con el consentimiento unánime de la totalidad de ellos, con excepción de los actos o contratos expresamente prohibidos por la Ley.

Art. (...) Estipulación para la creación de un consejo de vigilancia.- En las sociedades por acciones simplificadas podrá designarse una comisión de vigilancia, cuyas obligaciones fundamentales serán velar por el cumplimiento, por parte de los administradores, del contrato social y la recta gestión de los negocios.

La comisión de vigilancia estará integrada por tres miembros, accionistas o no, que no serán responsables de las gestiones realizadas por los administradores o gerentes, pero sí de sus faltas personales en la ejecución de su función.

5. Reformas Estatutarias y Reorganización de la Sociedad.-

Art. (...) Actos societarios.- Para que la asamblea pueda acordar válidamente cualquier acto societario en primera convocatoria, la misma deberá instalarse con uno o varios accionistas que representen, cuando menos, la mitad del capital social con derecho a voto. En segunda convocatoria, la junta se instalará con los accionistas presentes y que estuvieren habilitados para votar, inclusive con uno solo.

Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen, cuando menos, la mitad más uno de las acciones con derecho a voto, presentes en la respectiva reunión, salvo previsión en contrario del estatuto social.

La resolución deberá instrumentarse en documento privado, a menos que la reforma implique la transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el cual se registrá por dicha formalidad. En cualquier caso, cualquier acto societario surtirá efectos a partir de su inscripción en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Si para la transferencia de los bienes fuere necesaria la inscripción en el Registro de la Propiedad, ésta se hará posteriormente a la inscripción del acto societario en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Similar disposición deberá ser observada frente a cualquier bien cuya tradición esté sujeta a una inscripción

ASAMBLEA NACIONAL

registral. El presente aporte a título de sociedad no causará ningún impuesto, contribución, tasa ni carga tributaria alguna, bien sea fiscal, provincial, municipal o especial. La misma disposición será aplicable sobre cualquier acto cuya ejecución fuere necesaria para la consecución de tal fin.

Art. (...) Normas aplicables a la transformación, fusión y escisión.- Sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente capítulo, las normas que regulan la transformación, fusión y escisión de compañías les serán aplicables a la sociedad por acciones simplificadas, así como las disposiciones propias del derecho de separación del accionista, contenidas en la Ley de Compañías, en lo que no fuere contrario a este capítulo.

Art. (...) Proceso de transformación.- Cualquier compañía podrá transformarse en sociedad por acciones simplificada, antes de su disolución, siempre que así lo decida su asamblea o junta de socios o accionistas, con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen, cuando menos, las dos terceras partes del capital social. Los accionistas disidentes o no concurrentes a la reunión tendrán derecho de separación, de acuerdo con la Ley de Compañías. La decisión correspondiente, que deberá ser instrumentada en documento privado, será remitida a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para su aprobación mediante resolución. De cumplir con los requisitos correspondientes, dicha resolución, junto con el instrumento privado correspondiente, será inscrita en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá transformarse en una sociedad de cualquiera de los tipos previstos en la Ley de Compañías, siempre que la determinación respectiva sea adoptada por la asamblea mediante decisión unánime. Para tales efectos, se deberán observar las solemnidades establecidas para la constitución de la compañía cuya forma se adopte.

Art. (...) Derecho de separación.- Los accionistas disidentes o no concurrentes a la asamblea que acordó la transformación de una sociedad por acciones simplificada tendrán el derecho de separarse de ella, exigiendo el reembolso de la fracción del patrimonio de la sociedad que les correspondiere. Dicho reembolso deberá hacerse en proporción a la participación del accionista disidente o no concurrente en el capital social de la sociedad. No obstante, el reembolso será efectuado previa compensación de las pérdidas operacionales que, igualmente en proporción, le correspondiere asumir, y previa deducción de cualquier pasivo que el accionista disidente o no concurrente a la reunión eventualmente mantuviere con la sociedad.

Para la separación, el accionista notificará su decisión, por escrito, al representante legal de la sociedad, dentro de los tres días contados desde la fecha de la asamblea en que se adoptó el acuerdo de transformación. Para tales efectos, la asamblea que acordó la transformación deberá aprobar un estado de situación, cortado al día de la realización de la convocatoria, el

ASAMBLEA NACIONAL

cual servirá de base para el ejercicio del derecho de separación de los accionistas disidentes o no concurrentes a la reunión, así como la exigencia del reembolso del valor de sus acciones.

En caso que alguno de los accionistas hubiere ejercido su derecho de separación, el representante legal deberá elaborar el balance final definitivo, cerrado al día anterior al del otorgamiento del instrumento de transformación. El estado de situación preliminar y el balance final definitivo deberán ser cerrados dentro del mismo mes.

El balance final deberá considerar los egresos de la sociedad por efectos del ejercicio de este derecho y solamente podrá variar en el monto derivado de la separación de uno o varios accionistas. En su defecto, el balance final podrá registrar una reserva especial, destinada al reembolso correspondiente a los accionistas que se separan, cuando la sociedad careciere de liquidez. Dicho balance, junto con la lista de los accionistas que hayan hecho uso del derecho de separarse de la sociedad por acciones simplificada, deberá adjuntarse al instrumento privado de transformación.

Si ninguno de los accionistas hubiere ejercido su derecho de separación, el estado de situación previamente aprobado por la asamblea servirá de base para la instrumentación de la transformación. En aquel caso, el representante legal deberá señalar, de manera expresa en el instrumento privado de transformación, que ninguno de los accionistas ejerció su derecho de separarse de la sociedad por acciones simplificada. En este caso, el balance de situación será incorporado al instrumento privado de transformación.

Art. (...) Proceso de fusión.- Una sociedad por acciones simplificada podrá fusionarse con otra sociedad de la misma especie, bien sea por unión o por absorción. Para dichos efectos, se observarán las disposiciones del proceso de transformación de las sociedades por acciones simplificadas y, en lo que no resultare contrario a este capítulo, se aplicarán las disposiciones de la fusión, constantes en la Ley de Compañías.

A su vez, una sociedad por acciones simplificada podrá fusionarse con una compañía regulada por la Ley de Compañías. En esta clase de fusión, la decisión deberá ser adoptada por la asamblea de la sociedad por acciones simplificada y por la junta general de la compañía, en observancia de los requerimientos que correspondan a cada especie societaria.

Cuando una sociedad por acciones simplificada fuere a absorber a una compañía, se observarán las solemnidades previstas en este capítulo para la constitución de las sociedades por acciones simplificadas y, en lo que no resultare contrario a este capítulo, se aplicarán las disposiciones de la fusión, constantes en la Ley de Compañías. Cuando una compañía fuere a absorber a una sociedad por acciones simplificada, se observarán las solemnidades y disposiciones de la Ley de Compañías.

ASAMBLEA NACIONAL

En caso de fusión por unión de una compañía con una sociedad por acciones simplificada, se procederá conforme lo previsto en el inciso precedente, cuando la compañía resultante de este proceso fuere una sociedad por acciones simplificada. Si la sociedad resultante de esta fusión fuere una compañía, se observarán las solemnidades previstas en la Ley de Compañías.

Art. (...) Proceso de escisión.- Una sociedad por acciones simplificada podrá escindirse, surgiendo así una o más sociedades de la misma especie. Para dichos efectos, se observarán las disposiciones de los procesos de transformación y fusión de las sociedades por acciones simplificadas; y, en lo que no resultare contrario a este capítulo, se aplicarán las disposiciones de la escisión, constantes en la Ley de Compañías.

La escisión de una sociedad por acciones simplificada podrá dar lugar a la constitución de una o varias compañías reguladas por la Ley de Compañías. En esta clase de escisión, la decisión deberá ser adoptada por la asamblea de la sociedad escidente, de acuerdo con lo previsto en este capítulo. No obstante, dicho acto societario deberá ser instrumentado en sujeción de los requerimientos y solemnidades de la especie societaria adoptada para la constitución de las compañías resultantes de la escisión.

A su vez, una compañía podrá escindirse y constituirse, en consecuencia, en una sociedad por acciones simplificada. Para tales efectos, la decisión de la junta general de la compañía escidente deberá observar los requerimientos de la Ley de Compañías. Sin embargo, la instrumentación de dicho acto societario, el cual dará lugar al surgimiento de una sociedad por acciones simplificada por efectos de la escisión, deberá sujetarse a los requerimientos y solemnidades previstas en este capítulo para la constitución de esta especie de sociedad.

Art (...) Exención tributaria en los casos de fusión o escisión.- Los traspasos de bienes y pasivos que se realicen en procesos de escisión o fusión, no estarán sujetos a ningún impuesto, contribución, tasa ni carga tributaria alguna, bien sea fiscal, provincial, municipal o especial. La misma disposición será aplicable sobre cualquier acto cuya ejecución fuere necesaria para la consecución de tal fin.

Art. (...) Fusión abreviada.- En aquellos casos en que una sociedad por acciones simplificada detente más del 90% de las acciones de otra sociedad de la misma especie, aquélla podrá absorber a ésta, mediante determinación adoptada por los representantes legales o por las juntas directivas de las sociedades participantes en el proceso de fusión.

La fusión abreviada podrá realizarse por documento privado sujeto a aprobación previa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, previo a su inscripción en el Registro de Sociedades, salvo que, dentro los activos transferidos, se encuentren bienes cuya enajenación requiera escritura pública, en cuyo caso la decisión deberá instrumentarse observando dicha

ASAMBLEA NACIONAL

solemnidad. La fusión podrá dar lugar al derecho de separación en favor de los accionistas ausentes y disidentes, en los términos previstos en la Ley.

La fusión entre sociedades por acciones simplificadas y otras modalidades societarias no podrá acogerse al proceso abreviado previsto en este artículo.

6. Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de las Sociedades por Acciones Simplificadas

Art (...) Disolución de pleno derecho de las sociedades por acciones simplificadas.- Son causales de disolución de pleno derecho de las sociedades por acciones simplificadas, las siguientes:

- 1 Incumplir, por tres ejercicios económicos consecutivos, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Compañías

Para efectos informativos, cualquier persona podrá obtener, gratuitamente en el portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, un certificado que acredite si una sociedad por acciones simplificada ha cumplido con sus obligaciones documentales; o, en su defecto, un desglose de la documentación por presentar;

- 2 Vencimiento del plazo de duración previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, antes de su expiración; y,
- 3 El auto de quiebra de la sociedad, legalmente ejecutoriado.

Art (...) Disolución de las sociedades por acciones simplificadas por decisión del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, o su delegado, podrá, de oficio, declarar disuelta una sociedad por acciones simplificada cuando:

- 1 Exista imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social para el cual se constituyó, en caso de haberlo previsto en su estatuto;
- 2 Hubieren concluido las actividades para las cuales se constituyó, cuando su estatuto hubiere limitado su capacidad operacional a una o varias actividades empresariales;
- 3 La sociedad inobserve o contravenga la Ley, los reglamentos, resoluciones y demás normativa expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera o la Superintendencia, según corresponda, o los estatutos de la sociedad;

ASAMBLEA NACIONAL

- 4 La sociedad cuya intervención ha sido dispuesta por la Superintendencia, se niegue a cancelar los honorarios del interventor o no preste las facilidades para que este pueda actuar;
5. La sociedad que impida o dificulte a la Superintendencia cumplir con los objetivos de las inspecciones de control societario, conforme lo previsto en el artículo 440 de la Ley de Compañías;
6. No haya superado las causales que motivaron la intervención de la sociedad, previo informe del área de control de la Superintendencia que recomiende la disolución; y,
- 7 La sociedad registre pérdidas operacionales que asciendan al 50% o más de su patrimonio, de acuerdo con sus estados financieros.

Art (...) Excepción de la disolución por concurrencia de pérdidas operacionales.- Se exceptúa de la causal de disolución por concurrencia de pérdidas operacionales a las sociedades por acciones simplificadas durante sus cinco primeros ejercicios económicos.

Art. (...) Disolución voluntaria de las sociedades por acciones simplificadas.- Las sociedades por acciones simplificadas podrán disolverse voluntaria y anticipadamente. También podrán acogerse al proceso abreviado de disolución, liquidación y cancelación. Para tales efectos, se observarán las disposiciones pertinentes de la Sección XII de la Ley de Compañías, cuando no resultaren contrarias a este capítulo.

En ambos casos, las sociedades por acciones simplificadas se sujetarán a las solemnidades previstas por este capítulo para su constitución. No obstante, solamente el proceso abreviado de disolución, liquidación y cancelación requerirá de una resolución aprobatoria previa a su inscripción en el Registro de Sociedades.

Art (...) Procedimiento de liquidación de las sociedades por acciones simplificadas.- El procedimiento de liquidación de las sociedades por acciones simplificadas será el previsto en la Sección XII de la Ley de Compañías.

Las adjudicaciones derivadas de la liquidación societaria de una sociedad por acciones simplificada no causarán ningún impuesto, contribución, tasa, ni carga tributaria alguna, bien sea fiscal, provincial, municipal o especial. La misma disposición será aplicable sobre cualquier acto cuya ejecución fuere necesaria para la consecución de tal fin. Similar exención es aplicable sobre las adjudicaciones derivadas de la liquidación societaria de cualquiera de las especies societarias reconocidas por la Ley de Compañías.

Art. (...) Adjudicación de bienes inmuebles por efectos de la liquidación societaria de una sociedad por acciones simplificada.- En caso que, por efectos de la liquidación societaria de una sociedad por acciones simplificada, o como derivación del procedimiento abreviado de disolución, liquidación y cancelación de esta especie de sociedad, se adjudicaren

ASAMBLEA NACIONAL

bienes inmuebles, no se requerirá del otorgamiento de escritura pública para que opere la transmisión de dominio. El acta de la asamblea, debidamente protocolizada e inscrita en el Registro de la Propiedad que corresponda, le servirá de título de propiedad al accionista adjudicado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1358 del Código Civil.

Art (...) Reactivación de una sociedad por acciones simplificada.- Cualquiera que haya sido la causa de disolución, la sociedad por acciones simplificada puede reactivarse hasta antes de que se cancele su inscripción en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, siempre que se hubiere solucionado la causa que motivó su disolución y que la Superintendencia, previo informe del área de control, verifique la inexistencia de causales de disolución adicionales que justifiquen mantener a la sociedad por acciones simplificada en liquidación.

La reactivación de las sociedades por acciones simplificadas se sujetará a las solemnidades previstas por este capítulo para su constitución. No obstante, la reactivación requerirá de una resolución aprobatoria previa a su inscripción en el Registro de Sociedades.

Art (...) Cancelación de las sociedades por acciones simplificadas.- Culminado el proceso de liquidación de una sociedad por acciones simplificada, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dictará una resolución ordenando la cancelación de la inscripción de la misma en el Registro de Sociedades de dicho Órgano de Control.

La cancelación registral de una sociedad por acciones simplificada, así como los efectos derivados de la misma, se regirán a lo previsto en la Ley de Compañías.

7. Generalidades.-

Art. (...) Aprobación de estados financieros.- Los estados financieros, así como los informes de gestión, deberán ser presentados y puestos a consideración de la asamblea de accionistas por parte de su representante legal, para su aprobación.

Cuando se trate de sociedades por acciones simplificadas con único accionista, éste aprobará todas las cuentas sociales y dejará constancia de tal aprobación en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.

Los representantes legales de las sociedades por acciones simplificadas estarán obligados a remitir su información documental a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del primer cuatrimestre del correspondiente ejercicio económico. Para la aplicación de este artículo, se deberá considerar las obligaciones documentales previstas en el artículo 20 de la Ley de Compañías.

ASAMBLEA NACIONAL

Art. (...) Supresión de prohibiciones.- La prohibición contenida en el artículo 211 de la Ley de Compañías no será aplicable sobre una sociedad por acciones simplificada, a menos que en el estatuto social se disponga lo contrario.

Art. (...) Exclusión de accionistas.- La exclusión de accionistas requerirá aprobación de la asamblea. Para dichos efectos, la resolución correspondiente será adoptada con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen, cuando menos, las dos terceras partes del capital social con derecho de voto. Para el cómputo de dicho quórum decisorio, no se contara el porcentaje representado por el accionista o los accionistas que fueren objeto de esta medida.

La exclusión de los accionistas se regirá a las causales previstas en el artículo 82 de la Ley de Compañías. En adición, la exclusión podrá fundamentarse en el incumplimiento del deber de información del cambio de control en la sociedad accionista, que alude el artículo final del acápite tercero de este capítulo. Asimismo, el accionista que se ausenta o sea requerido judicialmente, y no vuelve ni justifica la causa de su ausencia, también podrá ser excluido de la sociedad por acciones simplificada.

Art. (...) Resolución de conflictos societarios.- Las diferencias que surjan entre los accionistas, la sociedad o los administradores de una sociedad por acciones simplificada, que tengan relación con la existencia o funcionamiento de la sociedad, incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva, así como el abuso del derecho, podrán ser resueltas a través de una mediación.

En caso de no llegarse a un acuerdo amistoso, las diferencias mencionadas en el inciso anterior podrán someterse a decisión arbitral, si así se pacta en el estatuto social. En este último caso, al dorso de los títulos de acciones constará una mención de la correspondiente cláusula compromisoria, incorporada al estatuto de la sociedad. Cumplido aquel requerimiento, se entenderá que el cesionario de una transferencia de acciones ha aceptado, de manera expresa, someterse al convenio arbitral previsto en el estatuto social.

Si no se hubiere pactado arbitraje para la resolución de conflictos societarios, se entenderá que todos los conflictos antes mencionados serán resueltos por el Juez de lo Civil del domicilio principal de la sociedad por acciones simplificada.

Art. (...) Unanimidad para la modificación de disposiciones estatutarias.- Las cláusulas consagradas en los estatutos conforme a lo previsto en el presente capítulo, con relación a la restricción a la negociación de acciones, autorización para la transferencia de acciones o para la resolución de conflictos societarios a través de la mediación o el arbitraje, sólo podrán ser incluidas o modificadas mediante la resolución unánime de los titulares del cien por ciento (100 %) del capital social.

ASAMBLEA NACIONAL

Art. (...) Desestimación de la personalidad jurídica.- Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados

La inoponibilidad de la personalidad jurídica solamente podrá declararse judicialmente, de manera alternativa, o como una de las pretensiones de un determinado juicio por colusión o mediante la correspondiente acción de inoponibilidad de la personalidad jurídica de la compañía deducida ante un juez de lo civil y mercantil del domicilio de la compañía o del lugar en que se ejecutó o celebró el acto o contrato dañoso, a elección del actor. El desvelamiento del velo societario se regirá por los artículos 17, 17A, 17B y la Disposición General Tercera de la Ley de Compañías

Art. (...) Abuso del derecho de voto. Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas, o de obtener, para sí o para un tercero, una ventaja injustificada.

Quien abusare de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio de que el juez competente pueda declarar la nulidad de la determinación adoptada.

La acción de indemnización de daños y perjuicios, así como la de nulidad de la resolución adoptada por un abuso del derecho de voto, podrá ejercerse cuando se comprobare un abuso de mayoría, de minoría o de paridad.

Art. (...) Digitalización de los libros sociales y asientos contables.- Las sociedades por acciones simplificadas podrán llevar, de así considerarlo conveniente, sus libros sociales y asientos contables de manera electrónica. De haberse optado por esta alternativa, la documentación correspondiente llevará la firma electrónica de las personas responsables de su elaboración, conforme lo previsto en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.

Art. (...) Acceso a la información societaria.- Los accionistas de una sociedad por acciones simplificadas podrán examinar todos los libros y documentos relativos a la administración social.

Los accionistas tienen el deber jurídico de guardar el debido sigilo respecto de los proyectos de propuestas, estrategias empresariales o cualquier otra información no divulgada, a la que tuvieren conocimiento mediante este mecanismo de garantía de acceso a la información. La

ASAMBLEA NACIONAL

sociedad por acciones simplificada podrá, de creerlo conveniente, requerir al accionista solicitante la suscripción de convenios de confidencialidad para efectos del acceso a la información respectiva.

Salvo autorización expresa de la sociedad por escrito, los accionistas que hubieren tenido acceso a la información descrita en el inciso precedente se abstendrán de reproducirla, utilizarla, explotarla o entregársela a terceros, bajo las responsabilidades administrativas, civiles y penales que, como derivación de dichas prácticas, pudieren concurrir.

Art. (...) Intervención administrativa de las sociedades por acciones simplificadas.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros podrá declarar la intervención administrativa de una sociedad por acciones simplificada, de acuerdo con las causales previstas en la Ley de Compañías. El decurso y efectos de dicha medida se regirán a lo previsto en la Ley de Compañías y sus reglamentos de aplicación

Art. (...) Remisión.- En lo no previsto en la presente ley, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones que rigen a las sociedades mercantiles previstas en la Ley de Compañías.

Art. (...) Control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.- Las sociedades por acciones simplificadas estarán sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, según las normas legales pertinentes

Art. (...) Actos societarios que requieren de resolución aprobatoria previa.- Los siguientes actos societarios requerirán resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de forma previa a su inscripción en el Registro de Sociedades:

1. Aumento de capital social;
2. Disminución de capital social;
3. Transformación;
4. Fusión;
5. Escisión;
6. Disolución, liquidación y cancelación abreviada;
7. Exclusión de accionistas;
8. Reactivación;
9. Cualquier acto societario cuya aprobación requiera de una inspección de control
10. Convalidación de actos societarios; y
11. Los demás actos societarios que, según la Ley de Compañías, requieren de aprobación previa de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

ASAMBLEA NACIONAL

OCTAVA.- A continuación de la sección IX de la Ley de Compañías sobre auditoría externa, inclúyase la siguiente sección innumerada de las empresas de beneficio e interés colectivo:

1. Definición, objeto, denominación, reformas estatutarias y obtención de la calidad de sociedad de beneficio e interés colectivo.

Art. (...).- Cualquier sociedad mercantil sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de manera voluntaria, podrá adoptar la condición de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo.

A la denominación de la compañía se podrá agregar, de creerlo la compañía conveniente, la expresión “Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo”, o las siglas B I.C. En este caso, se deberá observar el trámite de oposición de terceros al cambio de denominación, conforme a lo previsto en el artículo 33, segundo inciso, de la Ley de Compañías.

Art. (...).- Tendrán la calidad de sociedades de beneficio e interés colectivo aquellas compañías que, al desarrollar sus actividades operacionales en beneficio de los intereses de sus socios o accionistas, se obliguen a generar un impacto social positivo, en procura del interés de la sociedad y del medio ambiente. La recategorización como una sociedad de beneficio e interés colectivo no implica, de ninguna forma, la transformación a una especie societaria distinta a la originalmente adoptada, o la creación de una nueva sociedad mercantil.

Art. (...).- Cualquier compañía sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros podrá adoptar la categoría de sociedad de beneficio e interés colectivo. Dicha decisión deberá ser adoptada por la junta general de socios o accionistas. Para dichos efectos, será necesaria una aprobación que represente las dos terceras partes del capital social.

Art. (...).- Al momento de adoptar la calidad de sociedad de beneficio e interés colectivo, una compañía se encuentra en la obligación de crear un impacto material positivo en la sociedad y el medio ambiente. Las sociedades, nuevas o existentes, que deseen adoptar esta calidad, deberán incorporar a su estatuto social la obligación general de crear un impacto social o medioambiental positivo, y someterlo a su inscripción en el Registro Mercantil. Si la compañía resolviera cambiar de denominación, la inscripción registral referida requerirá de una resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, previo cumplimiento del trámite de oposición de terceros.

Además de la determinación clara y concreta de su actividad empresarial de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Compañías, y de su obligación de crear un impacto material positivo en la sociedad y el medio ambiente, el objeto social de una sociedad de beneficio e interés colectivo, si la misma lo estima conveniente, podrá contener un objetivo social o medioambiental específico.

ASAMBLEA NACIONAL

Una vez inscrita la reforma de estatutos, la sociedad de beneficio e interés colectivo tendrá la obligación de remitir dicha documentación a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para la correspondiente actualización en la base de datos institucional.

Los impactos materiales positivos descritos en este artículo serán evaluados de acuerdo con lo previsto en el capítulo III de esta ley.

Art. (...).- La adopción, por parte de sociedades ya constituidas y registradas, del régimen previsto en la presente ley, dará derecho de separación a los socios disidentes o no concurrentes a la junta general que tomó dicha decisión, en los términos del artículo 333 de la Ley de Compañías.

2. Áreas de impacto de las sociedades de beneficio e interés colectivo.

Art. (...).- Para el cumplimiento de su obligación general de crear un impacto material positivo y verificable en la sociedad y el medio ambiente, los administradores de una sociedad de beneficio e interés colectivo podrán adoptar medidas que abarquen una o varias de las siguientes áreas de impacto: Gobernanza, capital laboral, comunidad, clientes y medio ambiente. De ser el caso, los administradores de una sociedad de beneficio e interés colectivo podrán observar una, varias o todas las áreas de impacto para la consecución de los objetivos específicos incorporados en su objeto social.

Las medidas adoptadas para la consecución de los objetivos generales o específicos deberán ser detalladas en los informes de impacto de gestión, previstos en el capítulo III de la presente ley.

Los administradores de las sociedades de beneficio e interés colectivo no están obligados a cumplir con todas las áreas de impacto descritas en este capítulo. Sin embargo, de haberse escogido un área de impacto, su observancia será de obligatoria consideración por parte de la sociedad de beneficio e interés colectivo.

Art. (...).- El área de impacto a la gobernanza tiene relación con el gobierno corporativo de las compañías. Para tales efectos, los administradores de una sociedad de beneficio e interés colectivo podrán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Los intereses de la compañía y de sus socios;
2. Las consecuencias, al largo plazo, de cualquier decisión relacionada con la marcha operacional de la compañía que representan;
3. El mantenimiento y resguardo de la reputación y el buen nombre de la compañía;
4. La necesidad de tratar, de manera justa y equitativa, a todos los socios o accionistas; y,

ASAMBLEA NACIONAL

- 5 La expansión en la diversidad de la composición administrativa y fiscalizadora de la compañía.

Art. (...).- De acuerdo con el área de impacto al capital laboral, los administradores de las sociedades de beneficio e interés colectivo podrán tomar en consideración los intereses de sus trabajadores.

Esta área de impacto podrá abarcar, entre otros aspectos, los siguientes:

1. El establecimiento de una remuneración razonable, y analizar brechas salariales con el fin de establecer estándares de equidad en la percepción de remuneraciones;
2. El establecimiento de subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a su capital laboral;
3. Promover la participación de los trabajadores en la sociedad, bien sea a través de la adquisición de acciones o de su representación en los órganos de administración y/o fiscalización;
4. Brindar opciones de empleo que permita a su capital laboral tener flexibilidad en su jornada laboral y crear opciones de teletrabajo, sin afectar su remuneración; y,
5. Difundir, entre sus trabajadores, los estados financieros de la sociedad

Art. (...).- La relación de las sociedades de beneficio e interés colectivo con la comunidad podrá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

1. La necesidad de fomentar las relaciones sociales con los acreedores, proveedores y clientes de la compañía;
2. El impacto de las operaciones sociales en la comunidad;
3. El efecto de las operaciones de la compañía y sus subsidiarias, si las hubiere, en la economía local, regional, nacional e incluso internacional,
4. El incentivo de las actividades de voluntariado y creación de alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad, como para de su política de responsabilidad social;
5. El enfoque prioritario en la contratación de servicios o la adquisición de bienes de origen local, o que pertenezcan a emprendimientos desarrollados por mujeres o minorías étnicas.

Art. (...).- Con relación al área de impacto al medio ambiental, los administradores de una sociedad de beneficio e interés colectivo podrán, entre otros aspectos, considerar lo siguiente:

- a) El respeto a los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución de la República;
- b) El impacto de sus operaciones en el medio ambiente;

ASAMBLEA NACIONAL

- c) Supervisión de las emisiones de gases que provocan un efecto invernadero;
- d) Promoción de programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios; y,
- e) Aumento en la utilización de fuentes de energía renovable y la implementación de medidas de eficiencia energética.

Art. (...).- Con relación al área de impacto a los clientes, los administradores de una sociedad de beneficio e interés colectivo podrán atender un problema social o ambiental a través, o para, sus clientes. Entre otros aspectos, en este rubro se podrá considerar lo siguiente:

- a) Provisión de electricidad o productos que proveen electricidad, agua potable, viviendas asequibles y otras infraestructuras,
- b) Productos o servicios que permiten a las personas enfocarse en actividades que generan ingresos como programas informáticos financieros, tecnología móvil o servicios que optimizan/aumentan las actividades de negocio;
- c) Productos o servicios que mejoren la entrega de servicios de salud, resultados de la salud y vida saludable como los medicamentos, servicios de salud preventivo;
- d) Productos y servicios que tienen un enfoque educativo como los colegios, libros de texto, medios de comunicación y artes independientes, o conservar la cultura local tales como oficios artesanales; y,
- e) Productos o servicios que dirigen el dinero a negocios que tienen una misión comercial enfocada en tener un impacto social positivo.

Art. (...).- Los rubros precitados son enunciados sin perjuicio de que, con el fin de cumplir con su obligación general descrita en el artículo 4 de esta ley, una sociedad de beneficio e interés colectivo decidiera adoptar, durante su marcha operacional, otras medidas que tiendan a mejorar sus estándares en la gestión de impactos materiales positivos, con el fin de propender a un modelo de negocios que tengan un impacto social y/o ambiental favorable.

3. Informe de impacto de gestión.

Art. (...).- El representante legal de la sociedad de beneficio e interés colectivo deberá preparar, anualmente, un informe de impacto de la gestión de la respectiva sociedad, en el que se dará cuenta de las actividades adoptadas para la consecución de su obligación general de crear un impacto material positivo y verificable en la sociedad y el medio ambiente. De ser el caso, dicho reporte deberá ser emitido sobre la base de uno, varios o todos los rubros de las áreas de impacto previstas en el capítulo anterior, en caso que la sociedad de beneficio e interés colectivo hubiere decidido adoptarlas.

En caso de haberse incluido, de manera voluntaria, un propósito social o medioambiental específico en el objeto social de la sociedad de beneficio e interés colectivo, el informe de

ASAMBLEA NACIONAL

impacto de gestión deberá detallar las medidas implementadas para la consecución de aquel fin.

Art. (...).- El informe de impacto de gestión, elaborado bajo estándares reconocidos a nivel internacional, dará cuenta de las actividades de beneficio e interés colectivo que hubieren sido desarrolladas por la compañía. El estándar independiente para la elaboración del informe de impacto de gestión, que podrá estar sujeto a la auditoría de las autoridades competentes, deberá observar, al menos, las siguientes características:

- a) **Comprensibilidad:** En la metodología de evaluación y reporte se deberá analizar los efectos de la actividad de la sociedad de beneficio colectivo, en relación con las actividades de beneficio e interés colectivo;
- b) **Independencia.** La metodología de evaluación y reporte deberá ser desarrollada por una entidad que no esté controlada por la sociedad de beneficio e interés colectivo, o con sus matrices o subordinadas. De igual manera, este estándar independiente supone que la evaluación deberá ser realizada por una entidad que no mantenga vínculos contractuales, o a nivel de propiedad, administración, responsabilidad crediticia o resultados, con la sociedad de beneficio colectivo, o con sus matrices o subordinadas.
- c) **Confiabilidad.** Será construido por una entidad que cuente con experiencia en la evaluación del impacto de la actividad de las compañías en la comunidad y el medioambiente, y utilizará metodologías que incluyan un examen desde diferentes perspectivas, actores, estándares e indicadores;
- d) **Transparencia.** La información sobre los estándares independientes, así como la relativa a las entidades que los elaboren será publicada para conocimiento de la ciudadanía.

Art. (...).- Los estándares independientes a los que se refiere el artículo 14 de la presente ley sirven de base para la preparación por parte de las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo del informe de gestión que trata el artículo 13 de esta ley, y son:

1. La Certificación de sociedad Tipo B de B Corporation;
2. Los Estándares GRI del Global Reporting Initiative;
3. La norma ISO 26000 de Responsabilidad Social Empresarial de la International Organization for Standardization;
4. La Guía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Compass) de las naciones Unidas, el World Business Council for Sustainable Development y el GRI; y/o,
5. La serie de normas AA1000 de Relacionamento y Responsabilidad Social de Accountability.

Los estándares independientes señalados anteriormente no tienen un carácter excluyente entre sí, por lo tanto la administración de la sociedad podrá escoger aquellos que, en su opinión, sean los más apropiados para informar al máximo órgano social, acerca de los

ASAMBLEA NACIONAL

avances en el desarrollo de las actividades de beneficio e interés colectivo que hayan sido señaladas de forma expresa por la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo.

Art. (...).- El Informe de impacto de gestión estará a disposición de los socios o accionistas, junto con el reporte económico del correspondiente ejercicio fiscal, por lo menos ocho días antes por la Junta General, que lo conocerá y aprobará.

Dicho informe también deberá contar con una certificación emitida por una entidad independiente y especializada en los ámbitos en los que se pretende lograr un impacto positivo social y medioambiental.

Art. (...).- El Informe de impacto de gestión será publicado en la página web de la sociedad de beneficio e interés colectivo, conjuntamente con el reporte económico del ejercicio fiscal, omitiendo los gastos salariales, para que sean de público conocimiento en el transcurso de 15 días contado a partir de su conocimiento y aprobación por la junta general de la sociedad de beneficio e interés colectivo.

En caso de que una sociedad de beneficio e interés colectivo no posea una página web, deberá difundirlo en espacios públicos de la compañía y entregar a cada persona que solicitare el informe del inciso anterior de forma gratuita, mediante procesos expeditos y sin trabas

4. Ampliación del deber fiduciario de los administradores, gestores y directores

Art. (...).- En el desempeño de sus facultades, los administradores, los gestores y directores de una sociedad de beneficio e interés colectivo, cuando realicen o ejecuten cualquier actividad relacionada con su obligación general de crear un impacto material positivo en la sociedad y el medio ambiente, deberán considerar los efectos de sus acciones u omisiones respecto de:

- a) Los socios o accionistas de la sociedad de beneficio colectivo;
- b) Los trabajadores y la fuerza de trabajo de la sociedad, sus subsidiarias y sus proveedores;
- c) Los clientes y consumidores de la sociedad;
- d) La comunidad;
- e) El ambiente local y global;
- f) El desempeño de la sociedad a corto y largo plazo; y
- g) La capacidad de la sociedad para cumplir con su objeto social.

5. Exigencia judicial de cumplimiento de los deberes de beneficio colectivo

Art. (...).- La ampliación del deber fiduciario de los administradores, gestores y directores no implica la creación de una obligación exigible por terceros que no participaren en el capital

ASAMBLEA NACIONAL

social de la sociedad de beneficio e interés colectivo. En consecuencia, sus socios o accionistas son los exclusivos destinatarios del deber fiduciario de debida consideración.

El cumplimiento de los deberes fiduciarios impuestos a los administradores de una sociedad de beneficio e interés colectivo, sólo podrá ser exigido judicialmente por los socios o accionistas de dicha sociedad y no por terceros ajenos a la misma.

Sin embargo, se exime de responsabilidad personal a los administradores de las sociedades de beneficio e interés colectivo, sin posibilidad de reclamar indemnización o perjuicio alguno, por el cumplimiento de lo establecido en el capítulo II que resultare en una disminución de utilidades operacionales de la sociedad de beneficio e interés colectivo.

6. Pérdida de la categoría de sociedad de beneficio e interés colectivo

Art. (...).- El estatus normativo de sociedad de beneficio e interés colectivo puede terminarse mediante la modificación de sus estatutos para eliminar la declaración requerida. Para tales efectos, se requerirá que la decisión de perder la categoría de sociedad de beneficio e interés colectivo sea adoptada por las dos terceras partes del capital social que hubiere concurrido a la reunión.

Los socios o accionistas disidentes o no concurrentes a la junta general que adoptó tal decisión, tendrán derecho de separación en los términos del artículo 333 de la Ley de Compañías.

Art. (...).- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros puede eliminar el estatus de sociedad de beneficio e interés colectivo cuando constatare, en ejercicio de sus atribuciones de control societario, que los administradores de la sociedad de beneficio e interés colectivo han incumplido con su obligación de elaborar el informe de impacto de gestión.

La inobservancia de las disposiciones de esta ley no provocará la disolución de la correspondiente sociedad, sino, únicamente, la pérdida de la categoría de sociedad de beneficio e interés colectivo voluntariamente adoptada.

Art. (...).- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no podrá evaluar las actividades adoptadas por la sociedad de beneficio e interés colectivo para la consecución de su obligación general de crear un impacto material positivo y verificable en la sociedad y el medio ambiente.

La exigencia judicial de cumplimiento de los deberes de beneficio colectivo corresponde, de manera exclusiva, a los socios o accionistas de la sociedad de beneficio e interés colectivo.

ASAMBLEA NACIONAL

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Reglamento General.- Dentro del plazo de 180 días posteriores a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, la Función Ejecutiva expedirá el Reglamento General de la misma.

SEGUNDA.- Registro Nacional de Emprendedores.- El Servicio de Rentas Internas deberá crear e implementar, dentro del plazo de 90 días posteriores a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, el Registro Nacional de Emprendedores.

TERCERA.- Registro de Propiedad intelectual para emprendedores.- El ente rector de derechos intelectuales deberá crear, dentro del plazo de 90 días posteriores a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, procedimientos simplificados en todos sus servicios con tasas preferenciales para emprendedores.

CUARTA.- Otorgamiento de permisos sanitarios para emprendedores.- La Autoridad Sanitaria Nacional, dentro del plazo de 90 días posteriores a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, emitirá un proceso simplificado de notificación sanitaria para la comercialización de: alimentos procesados, aditivos alimentarios, cosméticos, productos higiénicos, nutracéuticos, homeopáticos, plaguicidas para uso doméstico e industrial y otros insumos de uso y consumo humano, fabricados en el territorio nacional para su comercialización y expendio. Los requisitos y condiciones se establecerán en el reglamento de la materia.

QUINTA. De la contratación pública para emprendedores.- El ente rector de las compras públicas, dentro del plazo de 90 días posteriores a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, implementará parámetros de evaluación y participación para emprendedores en las distintas modalidades de contratación pública.

Estos parámetros fomentarán la libre participación, concurrencia y trato justo, de conformidad con los principios que rigen la contratación pública y estarán detallados en las resoluciones administrativas que se emitan para el efecto.

SEXTA. Fuentes alternativas de financiamiento y garantía.- La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro del plazo de 90 días posteriores a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, establecerá los parámetros y condiciones a ser considerados en las distintas fuentes alternativas de financiamiento y garantías contempladas en el Capítulo V y VI de esta Ley.

SÉPTIMA.- Afiliación a la seguridad social.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro del plazo de 90 días posteriores a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial,

ASAMBLEA NACIONAL

establecerá una modalidad de afiliación especial para el personal que labore para emprendedores, en función de las modalidades de contratos de emprendimiento creadas para el efecto por el ente rector en materia laboral del país.

OCTAVA.- Las personas naturales o jurídicas domiciliadas en las provincias de Manabí y Esmeraldas, que se encuentren al día en sus obligaciones crediticias en el sistema financiero nacional, público y/o privado, o cuyos valores vencidos sean reestructurados y/o refinanciados dentro del término de 365 días contados a partir de la promulgación de la presente Ley, así como aquellas personas naturales o jurídicas de dichas jurisdicciones que se encuentren en la central de riesgo, podrán beneficiarse de las líneas de crédito para emprendimiento e innovación que otorga el Gobierno Nacional, a través de BanEcuador, Banco del Pacífico, o cualquier otra entidad del sistema financiero público, sin que para el efecto se considere la calificación/score del buró de crédito vigente, como requisito para la obtención de las mismas.

En estas jurisdicciones la calificación, aprobación y desembolso de las solicitudes de crédito para emprendimiento serán consideradas como prioritarias.

Esta disposición transitoria tendrá vigencia de dos años a partir de la fecha de publicación de la presente Ley en el Registro Oficial.

NOVENA.- El ente rector de cultura en el país en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, impulsarán políticas, programa y/o proyectos de fomento y promoción a los emprendimientos de carácter cultural, que promoverán las tradiciones, usos, costumbres, artes, música, cine, danza, teatro y/o cualquier otra manifestación de carácter artística o cultural.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los ... días del mes de ... del año ...